

RECIBE: Ema HORA: 11:50

EXPEDIENTE No. 69

**HONORABLES SEÑORES Y SEÑORAS COMISION DE POSTULACION
PARA MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 2019-2024**

YO GUSTAVO ADOLFO DUBÓN GÁLVEZ, de sesenta y tres años de edad, casado, guatemalteco, Abogado y Notario, de este domicilio, actuo bajo la dirección y procuración del Abogado que me auxilia y señalo como lugar para recibir notificaciones la cuarta avenida ocho guión setenta y dos de la zona uno, edificio Horizontal, segundo nivel oficina dos C, ciudad Guatemala, número telefónico 59198324 y el correo electrónico *gustavoadolfo_56@hotmail.com*.

Respetuosamente comparezco ante ustedes con el objeto de desvanecer el señalamiento de impedimento formulado en mi contra y para el efecto

EXPONGO:

a) Con fecha seis de febrero del año 2020 a las once horas con veintiocho minutos, a través de mi correo electrónico he sido notificado del señalamiento de impedimento promovido en contra de mi persona por la señora Helen Beatriz Mack Chang en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la FUNDACION MYRNA MACK, dentro del proceso de elección de Magistrados para Corte Suprema de Justicia, al respecto me permito manifestar lo siguiente:

b) La Representante Legal de la Fundación antes mencionada hace el señalamiento que entre las calidades para optar al cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia no cumpla con los requisitos éticos de honorabilidad imparcialidad e independenciam judicial, ante la honorable Comisión de Postulación para elegir los Magistrados para la Corte Suprema de Justicia, señalamiento que carece de fundamentos legales y probatorios, con el cual dicha Fundación solo trata de justificar su trabajo en Guatemala ante la



sociedad nacional e internacional, por tanto no puede ser tomada en cuenta como incidencia para objetar mi idoneidad y sustentar mi exclusión como aspirante a una Magistratura de la Corte Suprema de Justicia, es evidente que lo expuesto por la objetante resulta incongruente con la actuaciones dentro del antejuicio 71-2018 que a su vez originó el Amparo en única instancia identificado como expedientes acumulados numeros 6224-2018 y 6289-2018 ante la Corte de Constitucionalidad.

c) Argumentar en su señalamiento que con la decisión asumida en pleno se causó detrimento de la justicia, una situación de manifiesta impunidad y la imposibilidad material de que el Ministerio Público pudieran proceder en el marco de sus atribuciones a dilucidar la situación jurídica de Felipe Alejos Lorenzana, no tiene asidero legal, por las siguientes razones:

Primero: Se deja de considerar en mi caso fue por ausencia de Magistrados Titulares de la Corte Suprema de Justicia que integre el Pleno de conformidad con el artículo 77 de la Ley del Organismo Judicial “...*En caso de impedimento, excusas, recusación o ausencia temporal de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando esta deba conocer en pleno, serán llamados a integrarla los Presidentes de las Salas de Apelaciones...*”, en tal virtud se infiere que no existió ningún interés personal porque mi participación fue repentina y no programada, por ser Magistrado Presidente de Sala de Apelaciones que constituye la razón por la que fui llamado por parte de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia a integrar el pleno ese día, derivado de ello se puede advertir que tampoco existió parcialidad de mi persona para conocer del antejuicio 71-2018 y mucho menos de beneficiar al señor Felipe Alejos Lorenzana, toda vez que la decisión asumida en pleno fue proferida de conformidad con lo que regula la ley en Materia de Antejuicio y en cumplimiento de la función exclusiva e independiente de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado en forma imparcial y objetiva, además en congruencia

a lo recomendado por el juez pesquisador y el hecho que no sea conforme a las pretensiones e intereses de la objetante, no constituye detrimento de la justicia o una situación de manifiesta impunidad como lo afirma la denunciante.

Segundo: Desde ningún punto de vista jurídico se puede sustentar que la resolución de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, causó detrimento de la justicia y mucho menos impunidad para determinado actor, cuando en su señalamiento de impedimento la objetante omite mencionar que esta resolución que constituyó el acto reclamado dentro del Amparo en única instancia identificado como expedientes acumulados numeros 6224-2018 y 6289-2018 quedó sin efecto y validez jurídica, con fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en auto dictado por la Corte de Constitucionalidad en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, que en su parte resolutive declaro: "...IV. *Otorga amparo provisional dejando en suspenso definitivo la resolución señalada como acto reclamado...*" es decir la resolución de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que entonces no es viable pretender sostener que existe repercusión legal en una resolución que quedo sin valor y efecto jurídico, no se explica, ni se entiende en qué forma pudo causar detrimento o crea impunidad.

Tercero: Es de tomarse en consideración que la resolución de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve en auto dictado por la Corte de Constitucionalidad en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, también ordenó en el numeral romano V de la parte resolutive, emitir un nueva resolución a la Corte Suprema de Justicia en la que se debía pronunciar sobre las diligencias de antejuicio relacionadas, fundamentando debidamente su decisión de acuerdo por lo establecido en la ley aplicable. En ese sentido y en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal Constitucional el pleno de la Corte Suprema de Justicia dicta nueva resolución con fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, en la que ya no fui convocado a integrar y por lo tanto no firme la misma y soy



ajeno a la decisión que en segunda ocasión tomaron los Magistrados que integraron el pleno ese día como se puede observar en la copia impresa simple de dicha resolución que se acompaña al presente memorial de desvanecimiento de tacha.

Cuarto: En conclusión, considero que mi actuación al haber integrado el pleno de la Corte Suprema de Justicia con fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, no causa impedimento para poder postularme como Magistrado porque en ningún momento se logra poner en duda mis Principios éticos de honorabilidad, imparcialidad e independencia judicial dentro de mi desempeño como Magistrado Presidente de Sala de Apelaciones, en donde siempre he ejercido con decoro, honradez y responsabilidad mi cargo dentro de la administración de justicia, y como ya lo mencioné mi integración al Pleno en el caso que nos ocupa fue meramente circunstancial y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 77 de la Ley del Organismo Judicial, no existió ningún interés de mi parte para conocer específicamente del antejuicio promovido en contra del diputado Felipe Alejos Lorenzana, y por tanto mi actuación, no riñe con las normas éticas de honorabilidad y decoro que como profesional del Derecho estoy obligado a observar y más aún como funcionario público judicial, toda vez que actué en el ejercicio de mis funciones y atribuciones dentro de la administración de justicia y ante el llamado que se me hiciera para integrar por Corte Suprema de Justicia para conocer de ese caso en pleno de Magistrados y no fue una decisión en forma individual como pretende hacer ver a la Comisión de Postulación. Por lo que su infundado señalamiento está basado en presunciones erróneas y espurias que atentan contra mi honorabilidad, como se puede observar en ningún apartado de su escrito concretiza en que forma la resolución de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, que fue suspendida en forma definitiva causó agravio en detrimento a la justicia y crea impunidad para determinada persona y tampoco

individualiza con qué medios de prueba cuenta para demostrar que existió un litigio malicioso o interés personal de mi parte que haya quebrantados los principios Constitucionales de independencia judicial e imparcialidad.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

La Constitución Política de la República de Guatemala establece:

El artículo 12. Derecho de defensa. *“La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido...”*; artículo 28.: *“Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, lo que esta obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley...”*

La Ley de Comisiones de Postulación:

El artículo 20 *“Las Comisiones de Postulación daran a conocer los nombres de los participantes que reúnan los requisitos de Ley, por medio de una publicación que efectuen en el diario oficial y en dos de mayor circulación del país, para que cualquier persona que conozca sobre algún impedimento lo haga saber por escrito a dicha Comisión...”*

MEDIOS DE PRUEBA:

DOCUMENTOS:

1. Certificación de fecha treinta de enero de dos mil veinte extendida por la Karla Lorena Mejía Martínez, Secretaria adjunta I de la Corte de Constitucionalidad que contiene Auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Constitucionalidad en calidad de Tribunal extraordinario de Amparo dentro de los expedientes acumulados 6224-2018 y 6289-2018.
2. Copia impresa simple de resolución de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dentro de las diligencias de Antejuicio identificado con el número 71-2018.



3. Copia impresa simple de fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dentro de las diligencias de Antejudio identificado con el número 71-2018.

PETICION:

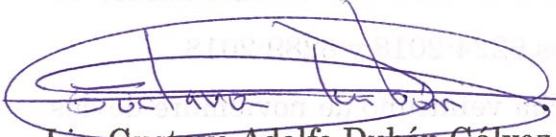
1. Que se tenga por recibido el presente memorial y documentos adjuntos, y se admita para su trámite.
2. Que se tome nota que actuo bajo la direccion y procuracion del Abogado que me auxilia y se tenga como lugar para recibir notificaciones el señalado o número telefónico 59198324 y el correo electrónico *gustavoadolfo_56@hotmail.com*.
3. Que se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado correspondiente.
4. Que en virtud de lo expuesto, y luego del análisis de lo manifestado, se tenga por desvanecido el señalamiento de impedimiento formulado en mi contra.

CITA DE LEYES:

Artículos citados y los siguientes: 4, 12, 19, 106 y 275 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 14, 15, 26, 27, 28, 31, 32 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos; 1 y 20 de la Ley de Comisiones de Postulación

Se acompaña copia del presente memorial y documentos adjuntos y una copia digitalizada en formato PDF.


Guatemala, 08 febrero del año 2020.



Lic. Gustavo Adolfo Dubón Gálvez

Expediente 69

En su auxilio y dirección:



Lic. Jorge Tulio Muñoz Solórzano
Abogado y Notario

**LA INFRASCRITA SECRETARIA ADJUNTA I DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD**

CERTIFICA:

Que la fotocopia anterior, compuesta de cinco hojas, es auténtica por ser fiel y exacta reproducción del auto de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictado por esta Corte, dentro de los expedientes acumulados seis mil doscientos veinticuatro-dos mil dieciocho (6224-2018) y seis mil doscientos ochenta y nueve-dos mil dieciocho (6289-2018) formados por amparo en única instancia, en las acciones promovidas por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Y, para entregar al **Abogado Gustavo Adolfo Dubón Gálvez**, extendiendo sello y firma en seis hojas incluyendo la presente, haciendo constar que en el asunto no se ha emitido sentencia, y por lo mismo, se encuentra en estado de resolver. Esta salvedad se formula con base en lo que establece el artículo 174 de la Ley del Organismo Judicial. Guatemala, treinta de enero de dos mil veinte.

KARLA LORENA MEJÍA MARTINEZ
SECRETARIA ADJUNTA I



SG-OMEJE-REV

EXPEDIENTES ACUMULADOS 6224-2018 Y 6289-2018**Oficial 7o de Secretaría General****CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EN CALIDAD DE TRIBUNAL****EXTRAORDINARIO DE AMPARO:** Guatemala, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.

Se tienen a la vista, para resolver respecto del amparo provisional solicitado, las actuaciones integradas en los expedientes arriba identificados, formados por amparos en única instancia promovidos por: i. el Ministerio Público, por medio del Agente Fiscal Andrei Vladimir González Arteaga, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, y ii. la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, por medio de la Mandataria Judicial con Representación, Astrid Odete Escobedo Barrondo, contra la Corte Suprema de Justicia.

ANTECEDENTES

Ante esta Corte, el Ministerio Público, por medio del Agente Fiscal Andrei Vladimir González Arteaga, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, por medio de la Mandataria Judicial con Representación, Astrid Odete Escobedo Barrondo, promovieron amparos en única instancia contra la Corte Suprema de Justicia, señalando como acto reclamado la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, por la que declaró no ha lugar a formación de causa contra Felipe Alejos Lorenzana, en calidad de Diputado al Congreso de la República de Guatemala, derivado de las diligencias de antejuicio promovidas en su contra por los ahora amparistas.

Las referidas acciones constitucionales fueron admitidas para su trámite en decretos de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho y dos de enero de dos



mil diecinueve, respectivamente, requiriéndose a la autoridad denunciada los antecedentes del caso o informe circunstanciado, los cuales se tienen a la vista. Posteriormente, en el segundo de los expedientes arriba identificados se emitió auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, en el cual se dispuso acumular ese asunto al primero de los amparos en única instancia relacionados.

CONSIDERANDO

-I-

El artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece que *“Deberá decretarse de oficio la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, entre otros, en los casos siguientes: ... c) Cuando la autoridad o entidad contra la que interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia...”*.

-II-

En el presente caso, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- promovieron amparos en única instancia contra la Corte Suprema de Justicia, señalando como acto reclamado la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, por la que declaró no ha lugar a formación de causa contra Felipe Alejos Lorenzana, en calidad de Diputado al Congreso de la República de Guatemala, derivado de las diligencias de antejuicio promovidas en su contra por los ahora amparistas.

Con relación a lo anterior, se trae a cuenta la parte conducente de lo considerado por la autoridad denunciada en la resolución que constituye el acto señalado como agravante: *“..Esta Corte del análisis de los antecedentes, medios*



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

Expedientes acumulados
6224-2018 y 6289-2018
Oficial 7° de Secretaría General
Página 3 de 10

de convicción aportados, normas legales antes relacionadas y en concordancia con las determinaciones rendidas por el juez pesquisador, concluye que en el presente caso no existen indicios suficientes que puedan sustentar la posibilidad de que el diputado del Congreso de la República de Guatemala, Felipe Alejos Lorenzana, pudo haber incurrido en actos que probablemente pudieran revestir las características de delitos, en virtud de obrar elementos de razonabilidad con los que se determina lo siguiente: **a)** no se demostró en el expediente que existiera autorización judicial para que se procediera a la extracción forense practicada a los números telefónicos cincuenta y cuatro millones seiscientos seis mil setecientos setenta y uno (54606771) y cuarenta millones nueve mil ciento dieciséis (40009116) contenida en el Informe de extracción, referencia INF EXT cero veintidós guion SIA guion dos mil quince, del veintidós de junio de dos mil quince "Informe sobre la Extracción Forense de Información CASO M tres mil quinientos cuarenta y dos diagonal dos mil quince diagonal tres", firmado por Richard Arévalo, investigador analista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, obrante en la pieza número I del folio treinta y dos al cincuenta y cinco del expediente de mérito y su respectiva ampliación de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho; **b)** no se acreditó fehacientemente que el número telefónico cuarenta millones nueve mil ciento dieciséis (40009116) estuviere asignado al diputado antejuicidado, pues se determinó por medio del informe rendido por la empresa Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima, de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, que la línea telefónica antes relacionada se encuentra a nombre de Luis Antonio Yaquian, de la entidad de Enlace de Asuntos Estatales, Asuntos Corporativos, tal como consta a folio setenta de la pieza I del expediente de amparo, además no consta documento



alguno en el cual se le hubiere entregado el referido aparato telefónico al diputado Felipe Alejos Lorenzana; c) no obran elementos de razonabilidad que demuestren que el denunciado ejerció presión alguna sobre las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, para que agilizaran los expedientes de reintegro de crédito fiscal, ya que únicamente se hacía referencia de "filipao" y "Felipe"; d) no se demostró que el denunciado hubiere ejercido ningún tipo de influencia sobre los magistrados integrantes de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativa, en los expedientes de amparos relacionados con devoluciones de créditos fiscales y e) no obra documentación financiera que acredite que el antejuiciado hubiere recibido las comisiones que supuestamente fueron requeridas. Aunado a todo lo anterior los procedimientos que se llevaron a cabo por parte del ente investigador vulneraron los derechos constitucionales del denunciado, ya que estos no se llevaron conforme lo dispuesto por los artículos 1 y 63 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, pues no obra en el expediente autorización judicial alguna que dispusiera la interceptación de las líneas telefónicas antes relacionadas. - Del análisis de lo anteriormente indicado, de la relación y estudio de las actuaciones obrantes en autos, la normativa legal citada, se establece que no existen razones suficientes que fundamenten la procedencia del antejuicio y la declaratoria de ha lugar a formación de causa. En virtud de que los hechos denunciados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, carecen de viabilidad, en consecuencia no ha lugar a formación de causa en contra del diputado antejuiciado. En ese orden de ideas y con fundamento en los elementos de razonabilidad aportados es procedente declarar sin lugar el antejuicio relacionado....".



-III-

Con relación al derecho de antejuicio, esta Corte ha considerado en reiteradas ocasiones que aquel ha sido concedido a determinadas personas que están al servicio del Estado, con la finalidad de preservar la estabilidad del desempeño del cargo que ocupan y garantizar el ejercicio de la función pública. Asimismo, que constituye la garantía para dichos funcionarios, de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa en su contra. En ese sentido, la Ley en Materia de Antejuicio, Decreto 85-2002 del Congreso de la República, regula el procedimiento, ámbito de aplicación, tramitación y efectos del antejuicio, el cual inicia con una denuncia o querella presentada contra algún dignatario o funcionario público y finaliza con la declaratoria de si ha lugar o no a formación de causa en su contra, previo análisis de las diligencias practicadas dentro del proceso y del informe presentado por la Comisión o Juez pesquisidor, según el caso; la autoridad que conozca de las diligencias de antejuicio únicamente declarará la existencia o no de hechos que puedan ser tipificados como delito [En igual sentido se ha pronunciado este Tribunal en sentencias de trece de marzo de dos mil dieciocho, once de julio de dos mil diecisiete y dieciséis de enero de dos mil dieciocho, emitidas en los expedientes quinientos noventa y cinco-dos mil diecisiete (595-2017), cinco mil trescientos dieciséis-dos mil dieciséis (5316-2016) y tres mil siete-dos mil diecisiete (3007-2017), respectivamente].

Por aparte, es importante referir que durante el trámite de las diligencias de antejuicio el artículo 11 de la Ley en Materia de Antejuicio establece que está prohibido a la Comisión Pesquisidora y a al Juez Pesquisidor: "...1. Arrogarse



facultades que competen a los jueces y Ministerio Público; 2. Tipificar un hecho como delito; 3. Determinar la culpabilidad o la inocencia del dignatario o funcionario público...”; aunado a ello, durante esa dilación el artículo 16 de la ley *ibídem* refiere: “...El juez no podrá emitir en la nota de remesa juicios de valor, ni tipificar delito...”; lo anterior, implica que la autoridad responsable del trámite y resolución de las pesquisas promovidas contra un funcionario que goce de ese derecho, tiene que atender las prohibiciones contenidas en las disposiciones legales establecidas en la ley de la materia antes indicada, ya que si inobserva su contenido varía las formas establecidas para su diligenciamiento, lo cual conlleva vulneración al principio jurídico del debido proceso.

En el presente caso, se establece que la Corte Suprema de Justicia, al resolver las diligencias de antejuicio promovidas por el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala contra Felipe Alejos Lorenzana, en calidad de Diputado al Congreso de la República de Guatemala, emitió la resolución que constituye el acto reclamado, en la cual concluyó que no existían indicios suficientes que pudieran sustentar la posibilidad de que el antejuiciado pudiera haber incurrido en actos constitutivos de delitos, sin embargo, en seguida, efectuó un análisis de determinados medios de convicción aportados al expediente, desvirtuando los mismos, argumentando que los procedimientos realizados para su obtención, por parte del Ministerio Público, vulneraron derechos constitucionales del Diputado aludido, debido a que “*estos no se llevaron conforme a lo dispuesto por los artículos 1 y 63 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, pues no obra en el expediente autorización judicial alguna que dispusiere la interceptación de las líneas telefónicas antes relacionadas.*”.



En ese orden de ideas, se advierte que la autoridad denunciada se extralimitó en el ejercicio de sus facultades, lo cual conlleva vulneración al principio jurídico del debido proceso, debido a que no se limitó a declarar la existencia o no de hechos que puedan ser tipificados como delito, conforme a la preceptuado en la ley rectora del acto, sino emitió juicios de valor con relación a los elementos de convicción aportados, lo cual constituye función propia de los tribunales competentes, que efectuarán en su momento procesal oportuno.

Con base en lo anterior, este Tribunal estima que en el presente asunto, concurre la circunstancia prevista en la literal c) del artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, razón por la cual se otorga amparo provisional, dejando en suspenso definitivo la resolución señalada como acto reclamado. Asimismo, para los efectos positivos de la protección interina que se concede, la Corte Suprema de Justicia deberá, en el plazo de cinco días contado a partir de la notificación de la presente decisión, emitir nueva resolución, en la que se pronuncie sobre las diligencias de antejuicio relacionadas fundamentando debidamente su decisión, de acuerdo con lo establecido en la ley aplicable. Lo anterior, con los apercibimientos que contempla la Ley de la materia.

-IV-

Por último, esta Corte estima necesario formular la salvedad de que no obstante lo regulado en el segundo párrafo del artículo 25 del Acuerdo 1-2013 propio, en el presente caso, debido a los efectos positivos que como consecuencia del otorgamiento del amparo provisional se disponen, deberá remitirse a la autoridad denunciada el antecedente respectivo, dejando copia certificada en autos del acto reclamado y de las actuaciones que estén relacionadas directamente con este o que lo originaron, con el objeto de que se



cumpla con lo aquí ordenado.

LEYES APLICABLES

Artículos citados, 265, 268, 272 literal b) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 6°, 7°, 27, 34, 35, 163 literal b), 185 de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 45 y 50 del Código Procesal Civil y Mercantil; 2, 5, 7, 8 y 50 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad.

POR TANTO

La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve: **I.** Incorpórese al expediente respectivo los escritos que anteceden y documentos adjuntos, registrados con los números veinte mil seiscientos sesenta y siete-dos mil dieciocho (20667-2018) contentivo de informe circunstanciado, así como el doscientos setenta y seis-dos mil diecinueve (276-2019), presentados por la Corte Suprema de Justicia -autoridad denunciada- por medio del Magistrado Nester Mauricio Vásquez Pimentel, Presidente de ese Órgano Jurisdiccional y del Organismo Judicial. **II.** Con base en la documentación acompañada, reconoce la calidad que ejerce el compareciente. **III.** Toma nota de que actúa con el auxilio de los abogados propuestos, así como del lugar señalado para recibir notificaciones. **IV. Otorga amparo provisional**, dejando en suspenso definitivo la resolución señalada como acto reclamado. **V.** Para los efectos positivos de la protección constitucional que se concede, la Corte Suprema de Justicia deberá, en el plazo de cinco días contado a partir de la notificación de la presente decisión, emitir nueva resolución, en la que se pronuncie sobre las diligencias de antejuicio relacionadas fundamentando debidamente su decisión, de acuerdo con lo establecido en la ley aplicable. Lo anterior, con los

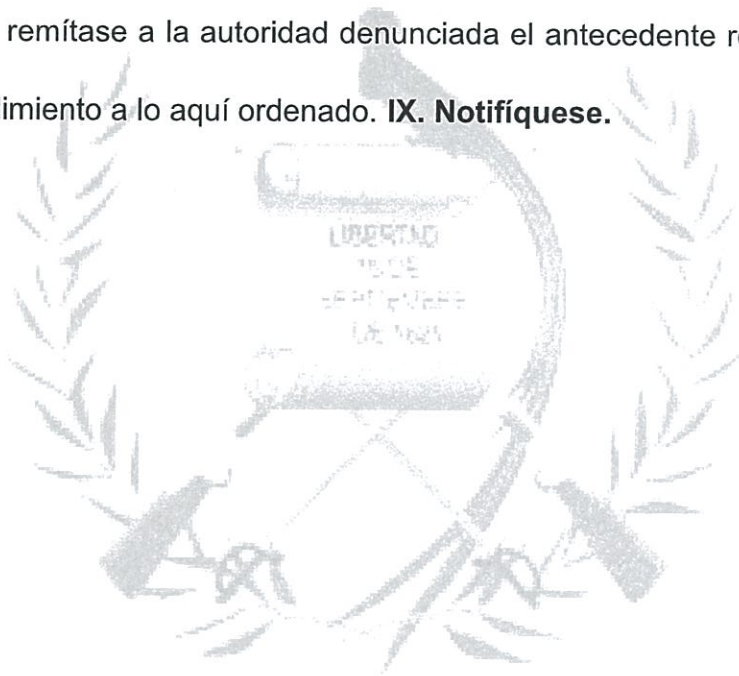


CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

Expedientes acumulados
6224-2018 y 6289-2018
Oficial 7° de Secretaría General
Página 9 de 10

apercibimientos que contempla la Ley de la materia. **VI.** Se tiene como tercero interesado y, por lo tanto como parte en el presente amparo, a Felipe Alejos Lorenzana, en calidad de Diputado al Congreso de la República de Guatemala. **VII.** Del antecedente remitido por la autoridad denunciada y del informe circunstanciado rendido, se da vista a los solicitantes del amparo y al tercero interesado referido, por el término común de **cuarenta y ocho horas**. **VIII.** Dejando fotocopia certificada de la resolución que constituye el acto reclamado y de las actuaciones judiciales que están relacionadas directamente con este o que lo originaron, remítase a la autoridad denunciada el antecedente respectivo, para que dé cumplimiento a lo aquí ordenado. **IX. Notifíquese.**



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

Expedientes acumulados
6224-2018 y 6289-2018
Oficial 7° de Secretaría General
Página 10 de 10



Firmado digitalmente
por BONERGE
AMILCAR MEJIA
ORELLANA Fecha:
16/05/2019 12:40:08 p.
m. Razón: Aprobado
Ubicación: Corte de
Constitucionalidad



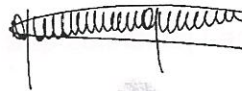
Firmado digitalmente
por GLORIA PATRICIA
PORRAS ESCOBAR
Fecha: 16/05/2019
12:40:57 p. m. Razón:
Aprobado Ubicación:
Corte de
Constitucionalidad



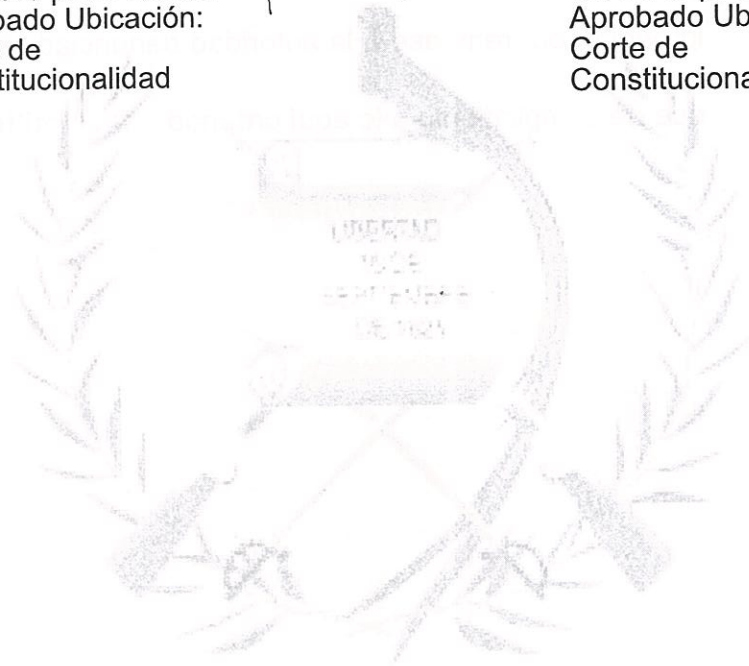
Firmado digitalmente
por NEFTALY
ALDANA HERRERA
Fecha: 16/05/2019
12:41:07 p. m. Razón:
Aprobado Ubicación:
Corte de
Constitucionalidad



Firmado digitalmente
por JOSE FRANCISCO
DE MATA VELA
Fecha: 16/05/2019
12:41:43 p. m. Razón:
Aprobado Ubicación:
Corte de
Constitucionalidad



Firmado digitalmente
por DINA JOSEFINA
OCHOA ESCRIBA
Fecha: 16/05/2019
12:42:40 p. m. Razón:
Aprobado Ubicación:
Corte de
Constitucionalidad



Firmado digitalmente
por MARTIN RAMON
GUZMAN
HERNANDEZ Fecha:
16/05/2019 12:43:34 p.
m. Razón: Aprobado
Ubicación: Corte de
Constitucionalidad



**ANTEJUICIO
71-2018**

Página 1



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Guatemala, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.

I) Se integra esta Corte con los magistrados suscritos. II) Se tienen a la vista para resolver las diligencias de **ANTEJUICIO** promovidas por el **MINISTERIO PÚBLICO** y la **COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA**, en contra del señor **FELIPE ALEJOS LORENZANA**, en su calidad de diputado del Congreso de la República de Guatemala.

I. DE LA DENUNCIA:

Los denunciantes al plantear las diligencias de Antejuicio, se fundamentaron en los hechos siguientes: **a)** durante el período comprendido del año dos mil catorce al mes de abril del año dos mil quince, existió una asociación de personas dedicadas profesionalmente al ejercicio del crimen, dividida funcionalmente en dos grupos: por una parte, servidores públicos y funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria y por la otra, agentes externos que fueron empleados en la citada entidad pública, así como por sujetos que poseían contactos dentro de la institución y entre otros individuos, citaron al diputado Felipe Alejos Lorenzana. Estos últimos ofrecían a diversos empresarios exportadores un portafolio de servicios de gestión ante la Superintendencia de Administración Tributaria para agilizar sus solicitudes de devolución de crédito fiscal y con la intervención del señor Giovanni Marroquín Navas y sus contactos, obtenían un trámite preferencial y expedito en los respectivos expedientes, recibiendo comisiones ilícitas que al final y de común acuerdo, se repartían entre ellos (servidores públicos e intermediarios); **b)** que el dignatario denunciado era quien manejaba el portafolio de clientes integrado por las entidades: Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



ANTEJUICIO
71-2018

Página 2

Anónima y Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima a las cuales prometió una tramitación ágil y eficiente de sus solicitudes de devolución de crédito fiscal, indicándoles que él tenía la ventaja de que *"conocía a la gente para ayudarlos en el tema"*; c) que el diputado antejuiciado, con su actuar pudo haber incurrido en los ilícitos penales de: c.1) tráfico de influencias regulado en el artículo 449 BIS del Código Penal, ya que actuando como intermediario, se aprovechó de su amistad y la que el señor Giovanni Marroquín tenía con servidores de la Superintendencia de Administración Tributaria, con el propósito de obtener para sí y para terceros, beneficios indebidos; asimismo, porque aceptó en pago una tarifa de éxito sobre la gestión; c.2) cohecho activo, previsto en el artículo 442 del Código Penal, en virtud que indirectamente, por medio de Giovanni Marroquín, ofreció beneficios económicos a servidores públicos de la administración tributaria, a título de regalo o pago para obtener un trámite expedito o preferencial en las solicitudes de devolución de crédito fiscal de las entidades Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima y Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima. d) Señalaron los denunciantes, que para demostrar la anterior hipótesis, tomaron en cuenta los cuadros informativos hallados en el dispositivo electrónico que le sustrajeron al señor Giovanni Marroquín Navas, en el momento de su captura el día quince de abril del año dos mil quince, los cuales revelaban información respecto de expedientes de devolución de crédito fiscal que la organización criminal que dirigía el mismo, tramitaba ante la Superintendencia aludida. En tales gráficas se podía evidenciar que entre los clientes de la estructura se encontraban las entidades Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima y Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima, entre otras, y que en las mismas, así como en





agendas y papeles sueltos de Giovanni Marroquín Navas, encontrados durante allanamientos a sus domicilios y oficinas e información bancaria, evidenciaron que existía un complejo sistema criminal, del que él mismo fue eje fundamental y del que también hizo parte importante el diputado antejuiciado y para sustentar tales aseveraciones, indicaron los denunciantes que acompañaban informes de un análisis criminal y financiero, que explicaba suficientemente la manera en que dicha organización criminal operó; e) asimismo señalaron los antejuiciantes que el día de la captura, le encontraron a Giovanni Marroquín otros dispositivos electrónicos que contenían información que evidenciaba la relación asociativa-criminal con servidores públicos de la Superintendencia de Administración Tributaria y agentes externos intermediarios, específicamente refiriéndose al diputado antejuiciado como "Filipao"; y que existían comunicaciones de audio y de texto entre ellos de los abonados celulares que ambos utilizaban, correspondientes a los números cuarenta millones nueve mil ciento dieciséis (40009116) y cincuenta y cuatro millones seiscientos seis mil setecientos setenta y uno (54606771) que evidenciaban su relación de conocimiento, amistad, cercanía, así como también el vínculo de asociación próximo a la Superintendencia de Administración Tributaria, en virtud de varias solicitudes de devolución de crédito fiscal, especialmente de las entidades Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima y Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima; f) la participación del funcionario antejuiciado, se evidenciaba de los análisis de varios expedientes de devolución de crédito fiscal, ya que en los cuadros de clientes, gestiones y comisiones de Giovanni Marroquín Navas, se tenía un trámite preferencial dentro de la administración tributaria; sobre tal argumento, manifestaron los antejuiciantes que existían las declaraciones testimoniales rendidas por el gerente general y gerente

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
GUATEMALA, C.A.

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



ANTEJUICIO
71-2018

Página 4

comercial de la entidad Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima, quienes manifestaron que fue el antejuiciado quien les ofreció los servicios de *"su gente"* y que ellos los aceptaron, comprometiéndose a pagar una tarifa de éxito que no alcanzaron a fijar, porque al salir a la luz el caso *"la línea"* dicha negociación se interrumpió tras la captura de *"la gente con la que él estaba trabajando las devoluciones de crédito fiscal"*; g) agregaron los denunciantes que uno de los miembros de la organización criminal que fungía como servidor público de la administración tributaria, contrató a un abogado para interponer acciones constitucionales contra la misma, bajo la premisa de que el Organismo Judicial iba a ordenar la designación de auditores para acelerar los procedimientos de solicitudes de devolución de crédito fiscal; auditores que usualmente eran nombrados en dependencias de la Intendencia de Fiscalización a cargo de otro servidor público, previo a que fueran emitidas las sentencias de amparo respectivas, ya que las mismas quedaban sin materia y eran resueltas sin lugar. En esas particulares condiciones ---señalaron los denunciantes--- que las interposiciones de las acciones constitucionales se interpretaban como un simple ardid, para aparentar legalidad en la agilización de los expedientes; sin embargo, derivado de la captura de Giovanni Marroquín Navas, se interrumpió el cumplimiento del trato entre la entidad Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima y el dignatario antejuiciado, ya que su *"gente"* había sido capturada, para acreditar dichos extremos los gerentes de las compañías aludidas entregaron documentación al aludido dignatario de la Nación para que agilizará el trámite de los expedientes correspondientes, pero quien hizo el seguimiento dentro de la administración tributaria fue Giovanni Marroquín Navas, tal y como quedó evidenciado en diversas conversaciones telefónicas; h) que entre





el flujo de los pagos en dinero a favor de la organización criminal, aparecía un evento que revestía singular importancia; que fue el hecho que los amparos interpuestos en relación a los expedientes de la entidad Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima fueron planteados a ruego, por el abogado Luis Felipe Hernández González, contratado por quien fungió como intendente jurídico de la administración tributaria en esa época; sin embargo sus honorarios eran cancelados por el señor Marroquín Navas por medio de cheques de empresas que tenía bajo su control, representadas por amigos o familiares, por lo que se consideraba que el diputado antejuiciado formaba parte de una sociedad del crimen organizado, por la que posteriormente pudo haber incurrido en el delito de asociación ilícita previsto en el artículo 4, numeral 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada (Decreto 21-2006 del Congreso de la República de Guatemala).

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, solicitaron las presentes diligencias de Antejuicio, al considerar que el diputado del Congreso de la República de Guatemala, Felipe Alejos Lorenzana, en ejercicio del cargo pudo haber incurrido en la probable comisión de hechos que pudieran resultar ser ilícitos y que den lugar a la formación de causa penal en su contra, según la información que consta en el expediente que contiene las presentes diligencias de Antejuicio, reflejados en la posible participación indirecta de su parte, por medio del señor Giovanni Marroquín Navas, en el ofrecimiento a servidores públicos de la Superintendencia de Administración Tributaria beneficios económicos a título de regalo o pago, para que dentro de las solicitudes de devolución de crédito fiscal de las entidades mercantiles Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima y Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



ANTEJUICIO
71-2018

Página 6

Gordo, Sociedad Anónima, en ejercicio de sus funciones públicas, dichos servidores les dieran un trámite expedito o preferencial; así como también en la posible participación, con la intervención del señor Giovanni Marroquín Navas y sus "conectes", de obtener un trámite preferencial y expedito dentro de los expedientes relacionados, a cambio de recibir un beneficio económico (tarifa de éxito) por parte de sus clientes (exportadores beneficiarios de las devoluciones del crédito fiscal aludido) el cual se repartían entre ellos y que se configuraría en ilícitos penales.

II. DE LA INHIBITORIA:

a). El Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal del Organismo Judicial, con fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, recibió las diligencias de antejuicio presentadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, remitiendo las actuaciones al Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, quien en resolución del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho se inhibió de conocer y ordenó que se remitiesen las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que procediera de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley en Materia de Antejuicio.

b) El antejuiciado presentó ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, actividad procesal defectuosa la cual fue declarada sin lugar en resolución del catorce de febrero de dos mil dieciocho. En contra de lo resuelto presentó reposición la cual fue rechazada *in limine* en resolución del veintidós de febrero de dos mil dieciocho.





c) El denunciado también presentó incidente de inconstitucionalidad parcial en caso concreto y el juez de primera instancia relacionado en auto del uno de marzo de dos mil dieciocho lo rechazó *in limine*.

d) Asimismo solicitó que las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, Delia Marina Dávila Salazar y María Eugenia Morales Aceña, se excusaran de conocer las diligencias de antejuicio promovidas en su contra y esta Corte en resolución del cuatro de abril de dos mil dieciocho hizo constar que la funcionarias judiciales no aceptaban las causales invocadas y que se continuara con el trámite del expediente.

e) También con fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho presentó recusación con expresión de causa en contra de los magistrados que integran esta Corte. Con fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho este Tribunal rechazó la recusación planteada.

f) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, esta Corte admitió para su trámite las diligencias de Antejuicio y nombró como juez pesquisidor a Jorge Antonio Valladares Arévalo, Vocal Primero de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, para que efectuara las investigaciones correspondientes, extremos que obran en la pieza II del folio trescientos sesenta y dos al trescientos sesenta y nueve del expediente identificado en el acápite.

g) Con fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho el juez pesquisidor emitió resolución en la que ordenó continuar con el trámite de las diligencias y citó a: los denunciantes, Rodrigo Presa Riera, David Carlos Ekman Khan y al funcionario antejuiciado, extremo que consta a folios trescientos ochenta y nueve y trescientos noventa, pieza II.

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



ANTEJUICIO
71-2018

Página 8

- h) El funcionario denunciado planteó recusación y el pesquisidor en auto del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, no la aceptó y ordenó que las actuaciones se elevaran a esta Corte. Este Tribunal en resolución del seis de junio de dos mil dieciocho rechazó la recusación y ordenó que el expediente se le devolviera al juez pesquisidor. En contra de lo resuelto el señor Felipe Alejos Lorenzana planteó reposición la cual fue rechazada por improcedente en resolución del siete de junio de dos mil dieciocho.
- i) El presidente de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en resolución del catorce de junio de dos mil dieciocho informó a esta Corte que el juez pesquisidor nombrado se encontraba en su período vacacional del siete al veinticinco de junio de dos mil dieciocho.
- j) Con fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho el juez pesquisidor emitió resolución en la que ordenó continuar con el trámite de las diligencias y citó nuevamente a: los denunciantes, Rodrigo Presa Riera, David Carlos Ekman Khan y al funcionario antejuiciado, extremo que consta del folio cuatrocientos setenta y cuatro al cuatrocientos setenta y cinco, pieza III.
- k) El funcionario denunciado planteó nuevamente recusación y el pesquisidor en auto del diez de julio de dos mil dieciocho, no la aceptó y ordenó que las actuaciones se elevaran a esta Corte. Este Tribunal en resolución del diecisiete de julio de dos mil dieciocho rechazó la recusación planteada y ordenó que se devolvieran las actuaciones al juez pesquisidor para que prosiguiera con el trámite correspondiente, tal como consta en los folios quinientos cincuenta y cuatro al quinientos cincuenta y siete de la pieza III.
- l) El antejuiciado recusó nuevamente a los magistrados de esta Corte, la cual





fue rechazada *in limine* en resolución del diecisiete de julio de dos mil dieciocho, tal como consta del folio quinientos cuarenta y nueve al quinientos cincuenta y tres, pieza III.

m) En resolución de fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho el juez pesquisador ordenó que se continuara con el trámite de las diligencias y citó nuevamente a: los denunciantes, Rodrigo Presa Riera, David Carlos Ekman Khan y al funcionario antejuiciado, extremo que consta a folio seiscientos treinta y cinco de la pieza IV.

n) El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho el juez pesquisador emitió resolución citando nuevamente al funcionario denunciado para que compareciera a la audiencia del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, obrante al folio mil setenta y cuatro de la pieza VI.

o) Se hace constar que en las actuaciones el antejuiciado presentó diez recusaciones las cuales no fueron aceptadas por el juez pesquisador y se rechazaron *in limine* por la Corte Suprema de Justicia.

p) El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho el juez pesquisador emitió resolución citando nuevamente al funcionario denunciado para que compareciera a la audiencia de fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, extremo que consta al folio mil noventa y cuatro de la pieza VI.

q) El juez pesquisador en resolución del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho en el numeral romano segundo, le hizo saber al antejuiciado que: "...Se le indica al presentado que de conformidad con el artículo 19, numeral 5 de la Ley en Materia de Antejuicio, y del análisis y conteo de las actuaciones, el plazo para remitir el informe circunstanciado al Órgano que la comisionó vence el día **nueve de noviembre de dos mil dieciocho**, derivado, del planteamiento

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



**ANTEJUICIO
71-2018**

Página 10

de una serie de recusaciones, en contra, del suscrito, que paralizaron constantemente este procedimiento, asimismo, el periodo de vacaciones autorizado a su persona, el cual se dejo (sic) constancia en autos...”, extremo que obra al folio mil ciento noventa y ocho de la pieza VI del expediente de amparo.

r) El funcionario antejuiciado presentó conflicto de jurisdicción y el juez pesquisador en resolución del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho lo rechazó por notoriamente improcedente.

s) El juez pesquisador emitió informe circunstanciado que fue recibido por esta Corte con fecha seis de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual concluyó que no era recomendable retirarle la inmunidad al antejuiciado, en virtud de no obrar medios de convicción suficientes en el expediente que acreditaran la comisión de los ilícitos penales imputados.

III. DE LAS PESQUISAS EFECTUADAS EN LAS DILIGENCIAS DE ANTEJUICIO:

a) Con fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, el juez pesquisador ordenó citar a: a.i) el Ministerio Público para el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho; a.ii) la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para el día veintiuno de agosto de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos; a.iii) Rodrigo Presa Riera y David Carlos Ekman Khan para el día veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho y a.iv) al antejuiciado, Felipe Alejos Lorenzana para que compareciera el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, extremo que consta al folio seiscientos treinta y cinco, pieza IV del expediente identificado en el acápite.

b) **DECLARACIÓN DE ANDREI VLADIMIR GONZÁLEZ ARTEAGA**, agente





fiscal del Ministerio Público, Fiscalía Especial contra la Impunidad, que tuvo verificativo el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, por medio de la cual ratificó la denuncia presentada, la cual obra en la pieza número IV del folio seiscientos cincuenta y siete al seiscientos sesenta y uno.

c) **DECLARACIÓN DE ASTRID ODETE ESCOBEDO BARRONDO**, mandataria judicial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que se llevó a cabo el veintiuno de agosto del año en curso, diligencia en la que ratificó la denuncia presentada y solicitó que se declarara con lugar el antejuicio planteado; que consta del folio seiscientos noventa y dos al seiscientos noventa y seis, pieza número IV.

d) **DECLARACIÓN DE RODRIGO PRESA RIERA**, que tuvo verificativo el veinticuatro de agosto del año en curso, diligencia en la que ratificó las declaraciones testimoniales de fechas veintitrés de agosto del año dos mil diecisiete y once de enero del año dos mil dieciocho, obrante del folio setecientos treinta al setecientos treinta y tres de la pieza número IV.

e) **DECLARACIÓN DE DAVID CARLOS EKMAN KHAN**, que tuvo verificativo el veinticuatro de agosto del año en curso, diligencia en la que ratificó la declaración testimonial del dos de abril del año dos mil diecisiete, obra del folio setecientos treinta y cinco al setecientos treinta y ocho de la pieza número IV del expediente de mérito.

f) **INFORME PRESENTADO POR LA ENTIDAD INGENIO PALO GORDO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, el cual fue requerido por el juez pesquisador con fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho y se tuvo por recibido por medio de resolución del trece de septiembre de dos mil dieciocho, tal como consta a folio ochocientos trece de la pieza V.

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



ANTEJUICIO
71-2018

Página 12

g) El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho el juez pesquisidor emitió resolución citando nuevamente al funcionario denunciado para que compareciera a la audiencia del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, extremo que consta al folio mil noventa y cuatro de la pieza VI del expediente de mérito. El funcionario antejuiciado no compareció a la diligencia señalada, presentando sus argumentos de defensa por medio de informe escrito el cual obra del folio mil ciento setenta y dos al mil ciento noventa y seis de la pieza número VI del expediente identificado en el acápite.

IV. DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE:

a) Oficio SGO guion cero uno guion dos mil dieciocho de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, de la encargada del despacho de la Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral, donde consta el listado de los diputados electos para el período dos mil dieciséis al dos mil veinte al Congreso de la República de Guatemala por el partido político TODOS, siendo electo y adjudicado el cargo al señor Felipe Alejos Lorenzana.

b) Copia simple de la certificación extendida por el secretario del Congreso de la República de Guatemala, de la sesión celebrada el catorce de enero de dos mil dieciséis, donde consta que Felipe Alejos Lorenzana, tomó posesión del cargo de diputado para la legislatura del año dos mil dieciséis al dos mil veinte. Obrante del folio mil ciento veinte al mil ciento veintidós, pieza VI del expediente identificado en el acápite.

c) Acta testimonial de Luis Felipe Hernández Gonzalez, que tuvo verificativo el cinco de mayo de dos mil dieciséis, que obra en la pieza número I del folio veintitrés al veinticuatro del expediente identificado en el acápite;

d) Actas testimoniales de Rodrigo Presa Riera, de fechas veintitrés de agosto





del año dos mil diecisiete y once de enero del año dos mil dieciocho, obrantes en los folios veinticinco al veintinueve de la pieza I del expediente de mérito;

e) Acta testimonial de David Carlos Ekman Khan del dos de abril del año dos mil diecisiete, contenida en los folios treinta al treinta y uno de la pieza I del expediente de mérito;

f) Informe de extracción, referencia INF EXT cero veintidós guion SIA guion dos mil quince, de fecha veintidós de junio de dos mil quince *"Informe sobre la Extracción Forense de Información CASO M tres mil quinientos cuarenta y dos diagonal dos mil quince diagonal tres"*, firmado por Richard Arévalo, investigador analista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, obrante en la pieza número I del folio treinta y dos al cincuenta y cinco del expediente de mérito;

g) Ampliación de informe de análisis criminal de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, identificado como DEAC guion dos mil diecisiete guion cinco guion D, que obra a folios cincuenta y seis al setenta y cinco de la pieza I del expediente identificado en el acápite.

V. DEL INFORME RENDIDO POR EL JUEZ PESQUISIDOR:

El seis de noviembre de dos mil dieciocho, el juez pesquisidor presentó informe el cual obra en la pieza número VII del folio mil doscientos treinta y ocho al mil doscientos cincuenta del expediente identificado en el acápite, en el que detalló las diligencias practicadas, los documentos recabados y al analizar las actuaciones consideró que estimaba que los hechos denunciados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en el antejuicio planteado en contra de Felipe Alejos Lorenzana no eran constitutivos de delito con respecto del denunciado. Con base en lo

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



anteriormente indicado el pesquisidor concluyó que no era procedente que se persiguiera penalmente al diputado antejuiciado, razón por la cual recomendó no quitar la inmunidad de la que goza el diputado del Congreso de la República de Guatemala antes indicado.

CONSIDERANDO

-I-

La prerrogativa del antejuicio está instituida constitucionalmente para que los funcionarios que gozan de ella, no puedan ser objeto de persecuciones penales por actos legítimos realizados en el ejercicio de su función pública, lo que evidencia su dualidad en cuanto a ser una garantía para la continuidad y eficiencia de esa función, y una excepción al principio de igualdad en materia penal establecida en el propio texto constitucional. La Corte de Constitucionalidad en reiterados fallos ha sostenido que el antejuicio opera como una garantía para determinados funcionarios expuestos sensiblemente a incriminaciones por actos realizados en el ejercicio de su cargo y se ha instituido no sólo para protegerlos de la posible ligereza en la sindicación, sino también para que las potestades de que están investidos no sean interrumpidas injustificadamente. Es reconocido que el procedimiento de antejuicio busca preservar a los funcionarios que de él gozan, de acciones tendenciosas o maliciosas, pretendiendo exigirles responsabilidad criminal.

-II-

El artículo 161 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que los diputados del Congreso de la República de Guatemala, gozarán de la prerrogativa de inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, lo anterior si la Corte Suprema de Justicia no declara





7
previamente que ha lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto.

La Ley en Materia de Antejucio, Decreto 85-2002 del Congreso de la República de Guatemala, dispone en su artículo 3º que el antejucio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable y que los dignatarios y funcionarios públicos gozan del beneficio de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa.

En el presente caso, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, solicitaron las diligencias de Antejucio, al considerar que al diputado del Congreso de la República de Guatemala, Felipe Alejos Lorenzana, pudo haber incurrido en la probable comisión de hechos ilícitos y que den lugar a la formación de causa penal en su contra, según la información que consta en el expediente, reflejados en la posible participación indirecta de su parte, por medio del señor Giovanni Marroquín Navas, en el ofrecimiento a servidores públicos de la Superintendencia de Administración Tributaria beneficios económicos a título de regalo o pago, para que dentro de las solicitudes de devolución de crédito fiscal de las entidades mercantiles Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima e Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima, en ejercicio de sus funciones públicas, dichos servidores les dieran un trámite expedito o preferencial; así como también en la posible participación, con la intervención del señor Giovanni Marroquín Navas y sus "conectes", de obtener un trámite preferencial y expedito dentro de los expedientes relacionados, a cambio de recibir un beneficio económico (tarifa de éxito) por parte de sus clientes

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
GUATEMALA, C.A.

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



SECCION DE REPRODUCCION ORIENTADO

(exportadores beneficiarios de las devoluciones del crédito fiscal aludido) las cuales se repartían entre ellos, configurándose dicho proceder en ilícitos penales.

-III-

Esta Corte del análisis de los antecedentes, medios de convicción aportados, normas legales antes relacionadas y en concordancia con las determinaciones rendidas por el juez pesquisador, concluye que en el presente caso no existen indicios suficientes que puedan sustentar la posibilidad de que el diputado del Congreso de la República de Guatemala, Felipe Alejos Lorenzana, pudo haber incurrido en actos que probablemente pudieran revestir las características de delitos, en virtud de obrar elementos de razonabilidad con los que se determina lo siguiente: **a)** no se demostró en el expediente que existiera autorización judicial para que se procediera a la extracción forense practicada a los números telefónicos cincuenta y cuatro millones seiscientos seis mil setecientos setenta y uno (54606771) y cuarenta millones nueve mil ciento dieciséis (40009116) contenida en el Informe de extracción, referencia INF EXT cero veintidós guion SIA guion dos mil quince, del veintidós de junio de dos mil quince *"Informe sobre la Extracción Forense de Información CASO M tres mil quinientos cuarenta y dos diagonal dos mil quince diagonal tres"*, firmado por Richard Arévalo, investigador analista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, obrante en la pieza número I del folio treinta y dos al cincuenta y cinco del expediente de mérito y su respectiva ampliación de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho; **b)** no se acreditó fehacientemente que el número telefónico cuarenta millones nueve mil ciento dieciséis (40009116) estuviere asignado al diputado antejuicificado, pues se determinó por medio del informe rendido por la





empresa Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima, de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, que la línea telefónica antes relacionada se encuentra a nombre de Luis Antonio Yaquian, de la entidad de Enlace de Asuntos Estatales, Asuntos Corporativos, tal como consta a folio setenta de la pieza I del expediente de amparo, además no consta documento alguno en el cual se le hubiere entregado el referido aparato telefónico al diputado Felipe Alejos Lorenzana; c) no obran elementos de razonabilidad que demuestren que el denunciado ejerció presión alguna sobre las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, para que agilizaran los expedientes de reintegro de crédito fiscal, ya que únicamente se hacía referencia de "filipao" y "Felipe"; d) no se demostró que el denunciado hubiere ejercido ningún tipo de influencia sobre los magistrados integrantes de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativa, en los expedientes de amparos relacionados con devoluciones de créditos fiscales y e) no obra documentación financiera que acredite que el antejuiciado hubiere recibido las comisiones que supuestamente fueron requeridas. Aunado a todo lo anterior los procedimientos que se llevaron a cabo por parte del ente investigador vulneraron los derechos constitucionales del denunciado, ya que estos no se llevaron conforme lo dispuesto por los artículos 1 y 63 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, pues no obra en el expediente autorización judicial alguna que dispusiere la interceptación de las líneas telefónicas antes relacionadas.

Del análisis de lo anteriormente indicado, de la relación y estudio de las actuaciones obrantes en autos, la normativa legal citada, se establece que no existen razones suficientes que fundamenten la procedencia del antejuicio y la

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



**ANTEJUICIO
71-2018**

Página 18

declaratoria de ha lugar a formación de causa. En virtud de que los hechos denunciados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, carecen de viabilidad, en consecuencia no ha lugar a formación de causa en contra del diputado antejuiciado. En ese orden de ideas y con fundamento en los elementos de razonabilidad aportados es procedente declarar sin lugar el antejuicio relacionado.

NORMAS LEGALES QUE SUSTENTAN ESTE FALLO

Artículos citados y 206 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 77 de la Ley del Organismo Judicial; 1, 2, 4, 10, 12, 14 literal a) y 19 de la Ley en Materia de Antejuicio.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, con base en lo considerado y en las leyes citadas, al resolver por mayoría **DECLARA: I) NO HA LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA** en contra de **FELIPE ALEJOS LORENZANA**, diputado del Congreso de la República de Guatemala. **II)** Notifíquese y archívese el presente expediente.

Msc. Nester Mauricio Vásquez Pimentel
Presidente del Organismo Judicial
y de la Corte Suprema de Justicia

Silvia Patricia Valdés Quezada
MAGISTRADA VOCAL PRIMERA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dr. Nery Osvaldo Medina Méndez
MAGISTRADO VOCAL SEGUNDO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Vitalina Orellana y Orellana
MAGISTRADA VOCAL TERCERA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPUBLICA DE GUATEMALA, C.A.


1201
Página No. 163
na lugar
ANTEJUICIO
71-2018

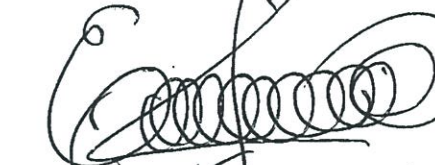


Página 19



Begler Contreras Calderón
MAGISTRADA PRESIDENTE
SALA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO
PENAL, EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADUANERA

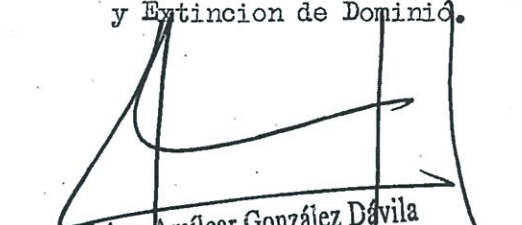

Domingo Libán Fajardo
Magistrado Presidente
Sala Segunda del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo



Sergio Amadeo Pineda Castañeda
MAGISTRADO VOCAL SEXTO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Harold Estuardo Ortiz Perez
Magistrado Presidente
Sala Segunda de la Corte de
Apelaciones del Ramo Penal
de Procesos de Mayor Riesgo
y Extincion de Dominio.

**CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA**
GUATEMALA, C.A.


Silvia Verónica García Molina
MAGISTRADA VOCAL OCTAVA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Jaime Amílcar González Dávila
Presidente
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal,
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente


Gustavo Adolfo Dubón Gálvez
MAGISTRADO PRESIDENTE
SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES
DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS
CONTRA EL AMBIENTE,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA


**Voto disidente y
razonado**
M.A. María Eugenia Morales Aceña
MAGISTRADA VOCAL DECIMA SEGUNDA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



0000034

1282

VOTO RAZONADO DISIDENTE DE LA ABOGADA MARÍA EUGENIA MORALES ACEÑA, MAGISTRADA VOCAL XII DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DENTRO DEL ANTEJUICIO NÚMERO SETENTA Y UNOGUIÓN DOS MIL DIECIOCHO (71-2018).

La suscrita no comparte el sentido y argumentaciones sostenidas por los Magistrados y Magistradas integrantes de la Corte Suprema de Justicia, quienes resuelven "NO HA LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA, en contra de FELIPE ALEJOS LORENZANA, diputado del Congreso de la República de Guatemala...", en el expediente de antejuicio arriba identificado. Por lo que en ejercicio de la potestad que por delegación constitucional que estoy investida procedo a razonar voto, con la finalidad de cumplir con la función instrumental de certeza y previsibilidad de derecho, valores ligados a la tutela de la autonomía individual y característico de la cultura política y jurídica de la modernidad, así como de la decisión racional, la cual está fundamentada debidamente por el interponente, así como con la documentación y archivos propuestos, herramientas valiosas para facilitar el control interno, endoprocesal de legalidad y toma de mi decisión jurídica.

La Honorable Corte de Constitucionalidad en concordancia con la Ley de Antejuicio, ha manifestado que: "...Al respecto se puede sostener que, la garantía otorgada a los dignatarios y funcionarios públicos para no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal, no busca blindar a la persona que la ostenta, al grado de ser impune, sino por el contrario, al requerirse que una autoridad competente declare que ha lugar a formación de causa, lo que se pretende es que la referida autoridad verifique que los señalamientos no son espurios, ilegítimos o



0000035

políticos y que solamente pretenden entorpecer el desempeño de la función pública..." (Sentencia de fecha 18 de enero de 2018, dentro del expediente 5384-2017). Los indicios encontrados en las actuaciones, detallados con total claridad en la solicitud de antejuicio, permiten descartar fehacientemente que los hechos denunciados respondan a cuestiones espurias, políticas o ilegítimas; resultando evidente, por el contrario, que se trata de hechos que presumiblemente podrían configurarse en ilícitos.

La resolución de mérito en su página 13 específicamente en su numeral romano V. detalla el informe el cual fue rendido por el Juez Pesquisidor, quien dentro de sus actuaciones recibió las declaraciones testimoniales de los señores Luis Felipe Hernández González, Rodrigo Presa Riera y David Carlos Ekman Khan, informe sobre la extracción forense de información, con numero de referencia EXT022-SIA-2015 de fecha uno de junio de dos mil quince, entre otros, los cuales fundamentaron su decisión al indicar : *".... se concluye que el antejuiciado señor Felipe Alejos Lorenzana no recibió ni entregó ningún pago, tampoco influenció por sí o por interpósita persona a ningún funcionario público para obtener la agilización de crédito fiscal a favor de las entidades Ingenio Palo Gordo Sociedad Anónima y Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima, pues ambas entidades lo desvinculan de dichas acciones, en similares términos se expresaron los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al negar alguna influencia, lo expuesto, en lugar de fortalecer las evidencias que describe el ente investigador, las desvanece..."*.

El informe anteriormente detallado, sirvió para que esta Corte Suprema de Justicia considerará en la página 16 de la resolución de mérito que: *"..a) No se demostró en el expediente que existiera autorización judicial para que se procediera a la*



1207

000003E

extracción forense practicada a los números telefónicos cincuenta y cuatro millones seiscientos seis mil setecientos setenta y uno (54606771) y cuarenta millones nueve mil ciento dieciséis (40009116) contenida en el Informe de extracción, referencia INF EXT cero veintidós guion SIA guion dos mil quince, del veintidós de junio de dos mil quince "informe sobre la Extracción Forense de Información CASO M tres mil quinientos cuarenta y dos diagonal dos mil quince diagonal tres", firmado por Richard Arévalo, investigador analista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, obrante en la pieza número 1 del folio treinta y dos al cincuenta y cinco del expediente de mérito y su respectiva ampliación de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho; b) no se acreditó fehacientemente que el número telefónico cuarenta millones nueve mil ciento dieciséis (40009116) estuviere asignado al diputado antejuiciado, pues se determinó por medio del informe rendido por la empresa Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima, de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, que la línea telefónica antes relacionado se encuentra a nombre de Luis Antonio Yaquian, de la entidad Enlace de Asuntos Estatales, Asuntos Corporativos, tal como consta a folio setenta de la pieza 1 del expediente de amparo, además no consta documento alguno en el cual se le hubiere entregado el referido aparato telefónico al diputado Felipe Alejos Lorenzana; c) no obran elementos de razonabilidad que demuestren que el denunciado ejerció presión alguna sobre las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, para que agilizaran los expedientes de reintegro de crédito fiscal, ya que únicamente se hacía referencia de "filpao" y "Felipe"; d) no se demostró que el denunciado hubiere ejercido ningún tipo de influencia sobre los magistrados integrantes de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativa, en los expedientes de amparo relacionados con



0000037

devoluciones de crédito fiscales y e) no obra documentación financiera que acredite que el antejuiciado hubiere recibido las comisiones que supuestamente fueron requeridas. Aunado a todo lo anterior los procedimientos que se llevaron a cabo por parte del ente investigados vulneraron los derechos constitucionales del denunciado, ya que estos no se llevaron conforme lo dispuesto por los artículos 1 y 63 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, pues no obra en el expediente autorización judicial alguna que dispusiere la interceptación de las líneas telefónicas antes relacionadas.”.

En base a lo anterior hay que indicar que el antejuicio es un instrumento habilitante de los procesos penales. La presunción de fidelidad de los funcionarios públicos a la Constitución no descarta la posibilidad de autenticidad de las acusaciones que contra ellos se realicen, esto sin vulnerar el derecho fundamental de presunción de inocencia que ostentamos todos y todas las personas en la República, entendiendo que el antejuicio no busca atribuir responsabilidades, sino que se establece como una acción de carácter administrativo, además, que no se pronuncia con autoridad de cosa juzgada sobre una violación a la ley, sino solamente sobre el hecho de existir indicios suficientes para que un órgano jurisdiccional pueda conocer sobre la posible responsabilidad o no, de una persona investida de esta inmunidad personal.

Por lo cual la Corte Suprema de Justicia, únicamente se encuentra facultada para establecer la existencia de tales indicios, y así determinar si ha formación de causa o no, por lo cual no puede verificar aspectos procesales que serían materia eminentemente de actuación del órgano jurisdiccional al momento de conocer el proceso penal, en virtud que como se recalcó estamos ante un procedimiento administrativo, por ello las posibles falencias o deficiencias procesales únicamente



1203
1204

0000038

GUATEMALA, C.A.

deberían ser impugnadas durante el proceso correspondiente.

El Juez pesquisador en su informe, en ningún momento se pronuncia sobre los indicios documentales, encontrados durante el allanamiento efectuado durante la captura del señor Giovanni Marroquin, en el cual se le incautaron, dispositivos electrónicos que contenían comunicaciones de audio y texto entre este y el antejuiciado, lo cual presupone una vinculación entre ellos. Asimismo, omite realizar un análisis sobre los informes financieros presentados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- y el Ministerio Público, los cuales constituyen indicios reales sobre los aspectos denunciados, consecuente deviene concluir que existen razones suficientes que fundamentan la procedencia del antejuicio, y su declaratoria de ha lugar a formación de causa del diputado antejuicio.

Considerando que la figura del antejuicio doctrinariamente es una prerrogativa, es decir un permiso, un beneficio o una dispensa que se otorga a una persona respecto a un determinado asunto, por lo cual no debe ser motivo de impunidad. Y esta Corte Suprema de Justicia ha indicado que el contenido del informe del juez pesquisador no pudo ser vinculante para la decisión tomada en esta fase administrativa, consecuentemente se establece la existencia de indicios suficientes que podrían sustentar la posibilidad que el diputado del Congreso de la Republica de Guatemala, Felipe Alejos Lorenzana pudo haber incurrido en actos que probablemente revisten características de delitos.

Por las consideraciones realizadas anteriormente, respetando, pero no compartiendo el criterio de la mayoría, dejo constancia expresa de mi disenso, ya que por los argumentos esgrimidos se establece que se debió resolver ha lugar la formación de causa en contra del Felipe Alejos Lorenzana.



0000039

Solicitando que este voto disidente sea notificado juntamente con la resolución.





**ANTEJUICIO
71-2018**

Página 1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Guatemala, veinte de mayo de dos mil diecinueve.

I) Se integra esta Corte con los magistrados suscritos. II) En acatamiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad en auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve emitido en los expedientes de amparos acumulados números 6224 y 6289-2018, se tienen a la vista para resolver las diligencias de **ANTEJUICIO** promovidas por el **MINISTERIO PÚBLICO** y la **COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA**, en contra del señor **FELIPE ALEJOS LORENZANA**, en su calidad de diputado del Congreso de la República de Guatemala.

I. DE LA DENUNCIA:

Los denunciantes al plantear las diligencias de Antejuicio, se fundamentaron en los hechos siguientes: a) durante el período comprendido del año dos mil catorce al mes de abril del año dos mil quince, existió una asociación de personas dedicadas profesionalmente al ejercicio del crimen, dividida funcionalmente en dos grupos: por una parte, servidores públicos y funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria y por la otra, agentes externos que fueron empleados en la citada entidad pública, así como por sujetos que poseían contactos dentro de la institución y entre otros individuos, citaron al diputado Felipe Alejos Lorenzana. Estos últimos ofrecían a diversos empresarios exportadores un portafolio de servicios de gestión ante la Superintendencia de Administración Tributaria para agilizar sus solicitudes de devolución de crédito fiscal y con la intervención del señor Giovanni Marroquín Navas y sus contactos, obtenían un trámite preferencial y expedito en los respectivos expedientes, recibiendo comisiones ilícitas que al final y de común acuerdo, se repartían entre ellos (servidores públicos e

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ANTEJUICIO
71-2018

Página 2

intermediarios); **b)** que el dignatario denunciado era quien manejaba el portafolio de clientes integrado por las entidades: Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima y Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima a las cuales prometió una tramitación ágil y eficiente de sus solicitudes de devolución de crédito fiscal, indicándoles que él tenía la ventaja de que *"conocía a la gente para ayudarlos en el tema"*; **c)** que el diputado antejuiciado, con su actuar pudo haber incurrido en los ilícitos penales de: **c.1)** tráfico de influencias regulado en el artículo 449 *Bis* del Código Penal, ya que actuando como intermediario, se aprovechó de su amistad y la que el señor Giovanni Marroquín tenía con servidores de la Superintendencia de Administración Tributaria, con el propósito de obtener para sí y para terceros, beneficios indebidos; asimismo, porque aceptó en pago una tarifa de éxito sobre la gestión; **c.2)** cohecho activo, previsto en el artículo 442 del Código Penal, en virtud que indirectamente, por medio de Giovanni Marroquín, ofreció beneficios económicos a servidores públicos de la administración tributaria, a título de regalo o pago para obtener un trámite expedito o preferencial en las solicitudes de devolución de crédito fiscal de las entidades Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima y Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima. **d)** Señalaron los denunciantes, que para demostrar la anterior hipótesis, tomaron en cuenta los cuadros informativos hallados en el dispositivo electrónico que le sustrajeron al señor Giovanni Marroquín Navas, en el momento de su captura el día quince de abril del año dos mil quince, los cuales revelaban información respecto de expedientes de devolución de crédito fiscal que la organización criminal que dirigía el mismo, tramitaba ante la Superintendencia aludida. En tales gráficas se podía evidenciar que entre los clientes de la estructura se encontraban las entidades Compañía





ANTEJUICIO
71-2018

Página 3

Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima y Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima, entre otras, y que en las mismas, así como en agendas y papeles sueltos de Giovanni Marroquín Navas, encontrados durante allanamientos a sus domicilios y oficinas e información bancaria, evidenciaron que existía un complejo sistema criminal, del que él mismo fue eje fundamental y del que también hizo parte importante el diputado antejuiciado y para sustentar tales aseveraciones, indicaron los denunciantes que acompañaban informes de un análisis criminal y financiero, que explicaba suficientemente la manera en que dicha organización criminal operó; e) asimismo señalaron los antejuiciantes que el día de la captura, le encontraron a Giovanni Marroquín otros dispositivos electrónicos que contenían información que evidenciaba la relación asociativa-criminal con servidores públicos de la Superintendencia de Administración Tributaria y agentes externos intermediarios, específicamente refiriéndose al diputado antejuiciado como "Filipao"; y que existían comunicaciones de audio y de texto entre ellos de los abonados celulares que ambos utilizaban, correspondientes a los números cuarenta millones nueve mil ciento dieciséis (40009116) y cincuenta y cuatro millones seiscientos seis mil setecientos setenta y uno (54606771) que evidenciaban su relación de conocimiento, amistad, cercanía, así como también el vínculo de asociación próximo a la Superintendencia de Administración Tributaria, en virtud de varias solicitudes de devolución de crédito fiscal, especialmente de las entidades Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima y Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima; f) la participación del funcionario antejuiciado, se evidenciaba de los análisis de varios expedientes de devolución de crédito fiscal, ya que en los cuadros de clientes, gestiones y comisiones de Giovanni Marroquín Navas, se tenía un trámite preferencial dentro de la

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



ANTEJUICIO
71-2018

Página 4

administración tributaria; sobre tal argumento, manifestaron los antejuiciantes que existían las declaraciones testimoniales rendidas por el gerente general y gerente comercial de la entidad Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima, quienes manifestaron que fue el antejuiciado quien les ofreció los servicios de *"su gente"* y que ellos los aceptaron, comprometiéndose a pagar una tarifa de éxito que no alcanzaron a fijar, porque al salir a la luz el caso *"la línea"* dicha negociación se interrumpió tras la captura de *"la gente con la que él estaba trabajando las devoluciones de crédito fiscal"*; g) agregaron los denunciante que uno de los miembros de la organización criminal que fungía como servidor público de la administración tributaria, contrató a un abogado para interponer acciones constitucionales contra la misma, bajo la premisa de que el Organismo Judicial iba a ordenar la designación de auditores para acelerar los procedimientos de solicitudes de devolución de crédito fiscal; auditores que usualmente eran nombrados en dependencias de la Intendencia de Fiscalización a cargo de otro servidor público, previo a que fueran emitidas las sentencias de amparo respectivas, ya que las mismas quedaban sin materia y eran resueltas sin lugar. En esas particulares condiciones —señalaron los denunciante— que las interposiciones de las acciones constitucionales se interpretaban como un simple ardid, para aparentar legalidad en la agilización de los expedientes; sin embargo, derivado de la captura de Giovanni Marroquín Navas, se interrumpió el cumplimiento del trato entre la entidad Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima y el dignatario antejuiciado, ya que su *"gente"* había sido capturada, para acreditar dichos extremos los gerentes de las compañías aludidas entregaron documentación al aludido dignatario de la Nación para que agilizará el trámite de los expedientes correspondientes, pero quien hizo el





ANTEJUICIO
71-2018

Página 5

seguimiento dentro de la administración tributaria fue Giovanni Marroquín Navas, tal y como quedó evidenciado en diversas conversaciones telefónicas; h) que entre el flujo de los pagos en dinero a favor de la organización criminal, aparecía un evento que revestía singular importancia, que fue el hecho que los amparos interpuestos en relación a los expedientes de la entidad Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima fueron planteados a ruego, por el abogado Luis Felipe Hernández González, contratado por quien fungió como intendente jurídico de la administración tributaria en esa época; sin embargo sus honorarios eran cancelados por el señor Marroquín Navas por medio de cheques de empresas que tenía bajo su control, representadas por amigos o familiares, por lo que se consideraba que el diputado antejuiciado formaba parte de una sociedad del crimen organizado, por la que posteriormente pudo haber incurrido en el delito de asociación ilícita previsto en el artículo 4, numeral 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada (Decreto 21-2006 del Congreso de la República de Guatemala).

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, solicitaron las presentes diligencias de Antejuicio, al considerar que el diputado del Congreso de la República de Guatemala, Felipe Alejos Lorenzana, en ejercicio del cargo pudo haber incurrido en la probable comisión de hechos que pudieran resultar ser ilícitos y que den lugar a la formación de causa penal en su contra, según la información que consta en el expediente que contiene las presentes diligencias de Antejuicio, reflejados en la posible participación indirecta de su parte, por medio del señor Giovanni Marroquín Navas, en el ofrecimiento a servidores públicos de la Superintendencia de Administración Tributaria beneficios económicos a título de regalo o pago, para que dentro de las

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



ANTEJUICIO
71-2018

Página 6

solicitudes de devolución de crédito fiscal de las entidades mercantiles Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima y Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima, en ejercicio de sus funciones públicas, dichos servidores les dieran un trámite expedito o preferencial; así como también en la posible participación, con la intervención del señor Giovanni Marroquín Navas y sus "conectes", de obtener un trámite preferencial y expedito dentro de los expedientes relacionados, a cambio de recibir un beneficio económico (tarifa de éxito) por parte de sus clientes (exportadores beneficiarios de las devoluciones del crédito fiscal aludido) el cual se repartían entre ellos y que se configuraría en ilícitos penales.

II. DE LA INHIBITORIA:

a) El Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal del Organismo Judicial, con fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, recibió las diligencias de antejuicio presentadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, remitiendo las actuaciones al Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, quien en resolución del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho se inhibió de conocer y ordenó que se remitieran las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que procediera de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley en Materia de Antejuicio.

b) El antejuiciado presentó ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, actividad procesal defectuosa la cual fue declarada sin lugar en resolución del catorce de febrero de dos mil dieciocho. En contra de lo resuelto presentó





ANTEJUICIO
71-2018

Página 7

reposición la cual fue rechazada *in limine* en resolución del veintidós de febrero de dos mil dieciocho.

c) El denunciado también presentó incidente de inconstitucionalidad parcial en caso concreto y el juez de primera instancia relacionado en auto del uno de marzo de dos mil dieciocho lo rechazó *in limine*.

d) Asimismo solicitó que las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, Delia Marina Dávila Salazar y María Eugenia Morales Aceña, se excusaran de conocer las diligencias de antejuicio promovidas en su contra y esta Corte en resolución del cuatro de abril de dos mil dieciocho hizo constar que la funcionarias judiciales no aceptaban las causales invocadas y que se continuara con el trámite del expediente.

e) También con fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho presentó recusación con expresión de causa en contra de los magistrados que integran esta Corte. Con fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho este Tribunal rechazó la recusación planteada.

f) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, esta Corte admitió para su trámite las diligencias de Antejuicio y nombró como juez pesquisidor a Jorge Antonio Valladares Arévalo, Vocal Primero de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, para que efectuara las investigaciones correspondientes, extremos que obran en la pieza II del folio trescientos sesenta y dos al trescientos sesenta y nueve del expediente identificado en el acápite.

g) Con fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho el juez pesquisidor emitió resolución en la que ordenó continuar con el trámite de las diligencias y citó a: los denunciantes, Rodrigo Presa Riera, David Carlos Ekman Khan y al

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



ANTEJUICIO
71-2018

Página 8

funcionario antejuiciado, extremo que consta a folios trescientos ochenta y nueve y trescientos noventa, pieza II.

h) El funcionario denunciado planteó recusación y el pesquisidor en auto del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, no la aceptó y ordenó que las actuaciones se elevaran a esta Corte. Este Tribunal en resolución del seis de junio de dos mil dieciocho rechazó la recusación y ordenó que el expediente se le devolviera al juez pesquisidor. En contra de lo resuelto el señor Felipe Alejos Lorenzana planteó reposición la cual fue rechazada por improcedente en resolución del siete de junio de dos mil dieciocho.

i) El presidente de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en resolución del catorce de junio de dos mil dieciocho informó a esta Corte que el juez pesquisidor nombrado se encontraba en su período vacacional del siete al veinticinco de junio de dos mil dieciocho.

j) Con fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho el juez pesquisidor emitió resolución en la que ordenó continuar con el trámite de las diligencias y citó nuevamente a: los denunciantes, Rodrigo Presa Riera, David Carlos Ekman Khan y al funcionario antejuiciado, extremo que consta del folio cuatrocientos setenta y cuatro al cuatrocientos setenta y cinco, pieza III.

k) El funcionario denunciado planteó nuevamente recusación y el pesquisidor en auto del diez de julio de dos mil dieciocho, no la aceptó y ordenó que las actuaciones se elevaran a esta Corte. Este Tribunal en resolución del diecisiete de julio de dos mil dieciocho rechazó la recusación planteada y ordenó que se devolvieran las actuaciones al juez pesquisidor para que prosiguiera con el trámite correspondiente, tal como consta en los folios quinientos cincuenta y





ANTEJUICIO
71-2018

Página 9

cuatro al quinientos cincuenta y siete de la pieza III.

l) El antejuiciado recusó nuevamente a los magistrados de esta Corte, la cual fue rechazada *in limine* en resolución del diecisiete de julio de dos mil dieciocho, tal como consta del folio quinientos cuarenta y nueve al quinientos cincuenta y tres, pieza III.

m) En resolución de fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho el juez pesquisador ordenó que se continuara con el trámite de las diligencias y citó nuevamente a: los denunciantes, Rodrigo Presa Riera, David Carlos Ekman Khan y al funcionario antejuiciado, extremo que consta a folio seiscientos treinta y cinco de la pieza IV.

n) El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho el juez pesquisador emitió resolución citando nuevamente al funcionario denunciado para que compareciera a la audiencia del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, obrante al folio mil setenta y cuatro de la pieza VI.

o) Se hace constar que en las actuaciones el antejuiciado presentó diez recusaciones las cuales no fueron aceptadas por el juez pesquisador y se rechazaron *in limine* por la Corte Suprema de Justicia.

p) El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho el juez pesquisador emitió resolución citando nuevamente al funcionario denunciado para que compareciera a la audiencia de fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, extremo que consta al folio mil noventa y cuatro de la pieza VI.

q). El juez pesquisador en resolución del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho en el numeral romano segundo, le hizo saber al antejuiciado que: "...Se le indica al presentado que de conformidad con el artículo 19, numeral 5 de la Ley en Materia de Antejuicio, y del análisis y conteo de las actuaciones, el

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



**ANTEJUICIO
71-2018**

Página 10

*plazo para remitir el informe circunstanciado al Órgano que la comisionó vence el día **nueve de noviembre de dos mil dieciocho**, derivado, del planteamiento de una serie de recusaciones, en contra, del suscrito, que paralizaron constantemente este procedimiento, asimismo, el periodo de vacaciones autorizado a su persona, el cual se dejó (sic) constancia en autos...”, extremo que obra al folio mil ciento noventa y ocho de la pieza VI del expediente de amparo.*

r) El funcionario antejuiciado presentó conflicto de jurisdicción y el juez pesquisidor en resolución del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho lo rechazó por notoriamente improcedente.

s) El magistrado pesquisidor emitió informe circunstanciado que fue recibido por esta Corte con fecha seis de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual concluyó que no era recomendable retirarle la inmunidad al antejuiciado, en virtud de no obrar medios de convicción suficientes en el expediente que acreditaran la comisión de los ilícitos penales imputados.

**III. DE LAS PESQUISAS EFECTUADAS EN LAS DILIGENCIAS
DE ANTEJUICIO:**

a) Con fecha **nueve de agosto de dos mil dieciocho**, el juez pesquisidor ordenó citar a: **a.i)** el Ministerio Público para el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho; **a.ii)** la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para el día veintiuno de agosto de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos; **a.iii)** Rodrigo Presa Riera y David Carlos Ekman Khan para el día **veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho** y **a.iv)** al antejuiciado, Felipe Alejos Lorenzana para que compareciera el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, extremo que consta al folio seiscientos treinta y cinco, pieza IV del





**ANTEJUICIO
71-2018**

Página 11

expediente identificado en el acápite.

b) DECLARACIÓN DE ANDREI VLADIMIR GONZÁLEZ ARTEAGA, agente fiscal del Ministerio Público, Fiscalía Especial contra la Impunidad, que tuvo verificativo el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, por medio de la cual ratificó la denuncia presentada, la cual obra en la pieza número IV del folio seiscientos cincuenta y siete al seiscientos sesenta y uno.

c) DECLARACIÓN DE ASTRID ODETE ESCOBEDO BARRONDO, mandataria judicial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que se llevó a cabo el veintiuno de agosto del año en curso, diligencia en la que ratificó la denuncia presentada y solicitó que se declarara con lugar el antejuicio planteado; que consta del folio seiscientos noventa y dos al seiscientos noventa y seis, pieza número IV.

d) DECLARACIÓN DE RODRIGO PRESA RIERA, que tuvo verificativo el veinticuatro de agosto del año en curso, diligencia en la que ratificó las declaraciones testimoniales de fechas veintitrés de agosto del año dos mil diecisiete y once de enero del año dos mil dieciocho, obrante del folio setecientos treinta al setecientos treinta y tres de la pieza número IV.

e) DECLARACIÓN DE DAVID CARLOS EKMAN KHAN, que tuvo verificativo el veinticuatro de agosto del año en curso, diligencia en la que ratificó la declaración testimonial del dos de abril del año dos mil diecisiete, obra del folio setecientos treinta y cinco al setecientos treinta y ocho de la pieza número IV del expediente de mérito.

f) INFORME PRESENTADO POR LA ENTIDAD COMPAÑIA AGRÍCOLA INDUSTRIAL INGENIO PALO GORDO, SOCIEDAD ANÓNIMA, el cual fue requerido por el juez pesquisador con fecha veinte de agosto de dos mil

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



ANTEJUICIO
71-2018

Página 12

dieciocho y se tuvo por recibido por medio de resolución del trece de septiembre de dos mil dieciocho, tal como consta a folio ochocientos trece de la pieza V.

g) El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho el juez pesquisidor emitió resolución citando nuevamente al funcionario denunciado para que compareciera a la audiencia del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, extremo que consta al folio mil noventa y cuatro de la pieza VI del expediente de mérito. El funcionario antejuiciado no compareció a la diligencia señalada, presentando sus argumentos de defensa por medio de informe escrito el cual obra del folio mil ciento setenta y dos al mil ciento noventa y seis de la pieza número VI del expediente identificado en el acápite.

IV. DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE:

a) Oficio SGO guion cero uno guion dos mil dieciocho de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, de la encargada del despacho de la Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral, donde consta el listado de los diputados electos para el período dos mil dieciséis al dos mil veinte al Congreso de la República de Guatemala por el partido político TODOS, siendo electo y adjudicado el cargo al señor Felipe Alejos Lorenzana.

b) Copia simple de la certificación extendida por el secretario del Congreso de la República de Guatemala, de la sesión celebrada el catorce de enero de dos mil dieciséis, donde consta que Felipe Alejos Lorenzana, tomó posesión del cargo de diputado para la legislatura del año dos mil dieciséis al dos mil veinte. Obrante del folio mil ciento veinte al mil ciento veintidós, pieza VI del expediente identificado en el acápite.

c) Acta testimonial de Luis Felipe Hernández Gonzalez, que tuvo verificativo el





ANTEJUICIO
71-2018

Página 13

cinco de mayo de dos mil dieciséis, que obra en la pieza número I del folio veintitrés al veinticuatro del expediente identificado en el acápite;

d) **Actas testimoniales de Rodrigo Presa Riera, de fechas veintitrés de agosto del año dos mil diecisiete y once de enero del año dos mil dieciocho**, obrantes en los folios veinticinco al veintinueve de la pieza I del expediente de mérito;

e) **Acta testimonial de David Carlos Ekman Khan del dos de abril del año dos mil diecisiete**, contenida en los folios treinta al treinta y uno de la pieza I del expediente de mérito;

f) **Informe de extracción, referencia INF EXT cero veintidós guion SIA guion dos mil quince, de fecha veintidós de junio de dos mil quince "Informe sobre la Extracción Forense de Información CASO M tres mil quinientos cuarenta y dos diagonal dos mil quince diagonal tres"**, firmado por Richard Arévalo, investigador analista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, obrante en la pieza número I del folio treinta y dos al cincuenta y cinco del expediente de mérito;

g) **Ampliación de informe de análisis criminal de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, identificado como DEAC guion dos mil diecisiete guion cinco guion D**, que obra a folios cincuenta y seis al setenta y cinco de la pieza I del expediente identificado en el acápite.

V. DEL INFORME RENDIDO POR EL JUEZ PESQUISIDOR:

El seis de noviembre de dos mil dieciocho, el juez pesquisidor presentó informe el cual obra en la pieza número VII del folio mil doscientos treinta y ocho al mil doscientos cincuenta del expediente identificado en el acápite, en el que detalló las diligencias practicadas, los documentos recabados y al analizar las actuaciones consideró que estimaba que los hechos denunciados por el

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



RECEIVED ORGANISMO JUDICIAL SECCION DE ANTEJUICIOS

ANTEJUICIO
71-2018

Página 14

Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en el antejuicio planteado en contra de Felipe Alejos Lorenzana no eran constitutivos de delito con respecto del denunciado al emitir las conclusiones siguientes: *"...En el presente caso, se tienen las siguientes:*

DECLARACIONES: *a) Rodrigo Presa Riera, quien en su deposición expresó que no se pagó nada al señor Felipe Alejos y él tampoco cobró, por lo que la negociación nunca se dio; y b) David Carlos Ekman Khan, expuso que no se negoció ni se pagó al antejuiciado y tampoco solicitó pago alguno, adicionalmente expuso que las devoluciones de crédito fiscal se diligencian (sic) a través de un reconocido bufete de Abogados que no tienen ninguna relación con el antejuiciado.*

DOCUMENTOS: *a) Se vincula al antejuiciado con una acción de amparo presentada para la devolución fiscal, sin embargo no se presentó evidencia que él de manera personal o por tercera persona haya requerido los servicios del abogado que presentó dicha acción, adicionalmente se tiene Certificación de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, donde aparece que en el año dos mil catorce se presentaron ochenta y dos (82) acciones de Amparo y en el año dos mil quince se presentaron doscientas noventa y ocho (298) acciones de Amparo, todas constantes y recurrentes que provienen de distintas entidades relacionadas a la devolución de crédito fiscal, por lo que, el amparo que se describe en las presentes diligencias, no es un caso aislado; b) informe suscrito por el Representante Legal de la entidad Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima, donde informa que por concepto de Agilización de crédito fiscal no se efectuó ninguna clase de pagos al señor Felipe Alejos Lorenzana (...) y d) Informe rendido por los Honorables Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, a través del cual exponen que no ha recibido ningún tipo de influencias e injerencia*





ANTEJUICIO
71-2018

Página 15

por parte del antejuiciado en la tramitación de los expedientes referentes a la devolución de crédito fiscal. Como podrán apreciar los (...) como derivación de lo expuesto, se torna imprósperable un juicio penal, por lo que atendiendo al principio de objetividad, se concluye que el antejuiciado señor Felipe Alejos Lorenzana no recibió ni entregó ningún pago, tampoco influenció por sí o por interpósita persona a ningún funcionario público para obtener la agilización de crédito fiscal a favor de las entidades Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima y Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima, pues ambas entidades lo desvinculan de dichas acciones, en similares términos se expresaron los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al negar alguna influencia, lo expuesto, en lugar de fortalecer las evidencias que describe el ente investigador, las desvanece..." (sic).

Con base en lo anteriormente indicado el pesquisidor determinó que no era procedente que se persiguiera penalmente al funcionario antejuiciado, razón por la cual recomendó no quitar la inmunidad de la que goza el diputado del Congreso de la República de Guatemala Felipe Alejos Lorenzana.

CONSIDERANDO

-I-

Con el objeto de analizar las presentes diligencias de antejuicio, esta Corte Suprema de Justicia señala inicialmente que la institución del antejuicio es considerada doctrinariamente como una prerrogativa; es decir, un permiso, un beneficio o una dispensa que se otorga a una persona respecto de determinado asunto. De esa cuenta el abogado guatemalteco Francisco Fonseca Penedo, en su libro "El Derecho de Antejuicio", puntualiza: "Esto quiere decir que hay algunos funcionarios que gozan de una especial prerrogativa, no concedida a la

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



**ANTEJUICIO
71-2018**

Página 16

generalidad de las personas y que consiste en que antes de que puedan ser enjuiciados criminalmente, aun cuando halla acusación de parte interesada, deben cumplirse ciertos requisitos previos para obtener una declaración, dictada por autoridad competente, de que ha lugar a formación de causa criminal contra el funcionario. Para obtener esta declaratoria es preciso tramitar diligencias especialmente encaminadas a ese fin. Si la petición se resuelve en el sentido de que ha lugar a formación de causa, ya puede iniciarse la acusación; pero si se declara que no ha lugar, se produce un obstáculo legal que impide el enjuiciamiento del funcionario". De otra parte, el autor Raúl Goldstein, en el Diccionario de Derecho Penal y Criminología, define el Antejudio como el: "privilegio de carácter procesal, por el cual se establecen determinadas condiciones extraordinarias para el procesamiento de una persona, consistentes en la sustracción temporal del sujeto a la ley procesal común, como el desafuero del legislador, del juez, del presidente, y sólo tiene el alcance de un impedimento que posterga el proceso común hasta que se haya producido el desafuero o la destitución.". Así mismo, el jurista Eduardo J. Couture, en su obra denominada Vocabulario Jurídico, define el antejudio como un "Procedimiento preliminar al juicio de responsabilidad judicial, tendiente a calificar prima facie la admisibilidad de la acusación o demanda..."

El Derecho de Antejudio, al ser una figura jurídica de naturaleza pública que se origina en la Constitución Política de la República de Guatemala y que se regula por una ley de orden público - Ley en Materia de Antejudio-, contiene en sí mismo elementos o atributos que determinan el ejercicio de dicho derecho por parte de los dignatarios y funcionarios públicos que gozan de tal prerrogativa; dichos atributos son normados por el artículo 3 de la Ley en Materia de Antejudio, Decreto 85-2002 del Congreso de la República de





ANTEJUICIO
71-2018

Página 17

Guatemala, que indica: *"El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable"*. (El resaltado es propio).

De igual manera, el artículo citado define el antejuicio como la garantía que la Constitución Política de la República otorga a los dignatarios y funcionarios públicos, de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa. Dicho procedimiento previo, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la citada normativa, puede iniciarse por medio de las siguientes acciones: *"El antejuicio se origina por denuncia ante el juez de paz o querella presentada ante juez de primera instancia..."*; así mismo, el artículo referido establece que: *"...La denuncia o querella podrá ser presentada por cualquier persona a la que le conste la comisión de un acto o hecho constitutivo de delito por parte de un dignatario o funcionario público, y no simplemente por razones espurias, políticas o ilegítimas"*.

-II-

El artículo 161 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que los diputados del Congreso de la República de Guatemala, gozarán de la prerrogativa de inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, lo anterior si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que ha lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto.

En el presente caso, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, solicitaron las diligencias de Antejuicio, al considerar que el diputado del Congreso de la República de Guatemala, Felipe Alejos Lorenzana, pudo haber incurrido en la probable comisión de hechos ilícitos y que

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



**ANTEJUICIO
71-2018**

Página 18

den lugar a la formación de causa penal en su contra, según la información que consta en el expediente, reflejados en la posible participación indirecta de su parte, por medio del señor Giovanni Marroquín Navas, en el ofrecimiento a servidores públicos de la Superintendencia de Administración Tributaria beneficios económicos a título de regalo o pago, para que dentro de las solicitudes de devolución de crédito fiscal de las entidades Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima y Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima, en ejercicio de sus funciones públicas, dichos servidores les dieran un trámite expedito o preferencial; así como también en la posible participación, con la intervención del señor Giovanni Marroquín Navas y sus "conectes", de obtener un trámite preferencial y expedito dentro de los expedientes relacionados, a cambio de recibir un beneficio económico (tarifa de éxito) por parte de sus clientes (exportadores beneficiarios de las devoluciones del crédito fiscal aludido) las cuales se repartían entre ellos, configurándose dicho proceder en ilícitos penales (obrante en la pieza I del folio uno al quince del expediente de mérito).

-III-

La Ley en Materia de Antejuicio, Decreto 85-2002 del Congreso de la República de Guatemala, dispone en su artículo 3º que el Antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable y que los dignatarios y funcionarios públicos gozan del beneficio de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a la formación de causa.

De las atribuciones del pesquisidor: con fundamento en los artículos 10 y 19 de la Ley en Materia de Antejuicio, el pesquisidor tendrá las funciones siguientes: a)





ANTEJUICIO
71-2018

Página 19

analizar los documentos; **b)** solicitar la ratificación de la denuncia o querella; **c)** escuchar al funcionario público o dignatario contra quien se hubiere presentado la denuncia o querella; **d)** practicar cuantas diligencias se estime pertinentes para el esclarecimiento del hecho; **e)** remitir su informe circunstanciado al órgano que la comisionó; **f)** analizar los documentos que se presenten para establecer la realidad y veracidad de los hechos; **g)** tomar declaración del denunciante o querellante así como del dignatario o funcionario público afectado, y efectuará cuanta diligencia estime pertinente; **h)** si de los hechos denunciados existen motivos suficientes para declarar que ha lugar a la formación de causa, deberá emitirse el informe correspondiente; **i)** si se declara con lugar el antejuicio el juez pesquisador remitirá el expediente a la Corte Suprema de Justicia, para que ésta a su vez, lo remita al juez competente y **j)** emitir su dictamen o informe dentro del plazo no mayor de sesenta (60) días.

De las prohibiciones del pesquisador: de conformidad con los artículos 11 y 16 de la Ley en Materia de Antejuicio, el pesquisador tiene prohibido: **a)** arrogarse facultades que competen a los jueces y Ministerio Público; **b)** tipificar un hecho como delito y **c)** determinar la culpabilidad o la inocencia del dignatario o funcionario público.

Al respecto, la Corte de Constitucionalidad ha estimado que la autoridad que conozca las diligencias de antejuicio únicamente debe declarar la existencia o no de hechos que puedan ser tipificados como ilícitos, conforme a lo preceptuado en la ley rectora del acto, en sentencia del once de julio de dos mil diecisiete emitida en el expediente número 5316-2016, señaló: "...La Ley en Materia de Antejuicio, regula el procedimiento, ámbito de aplicación, tramitación y efectos del antejuicio, el cual inicia con una denuncia o querella presentada contra algún dignatario o funcionario público

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



**ANTEJUICIO
71-2018**

Página 20

y finaliza con la declaratoria de si ha lugar o no a formación de causa en su contra, previo análisis de las diligencias practicadas dentro del proceso y del informe presentado por la Comisión o Juez pesquisidor, según el caso; **la autoridad que conozca de las diligencias de antejuicio únicamente declarará la existencia o no de hechos que puedan ser tipificados como delito...** (Sobresaltado es propio). Igual criterio fue sustentado por sentencia del trece de marzo y dieciséis de enero de dos mil dieciocho en los expedientes 595-2017 y 3007-2017.

-IV-

Esta Corte en acatamiento de lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad en auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve emitido en los expedientes de amparos acumulados números 6224 y 6289-2018, procede a emitir nuevo pronunciamiento en el expediente identificado en el acápite, por lo que considera pertinente indicar que las diligencias de antejuicio no prejuzgan sobre la culpabilidad o inocencia del funcionario antejuiciado, sino sobre la prosecución de un proceso penal en el que podrá hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes y aportar las pruebas con la finalidad de que se resuelva su situación jurídica; lo cual no supone una vulneración a la presunción de inocencia. Asimismo es procedente señalar que es función primordial que en toda diligencia se respete el derecho de defensa, la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, tal como le asiste al funcionario antejuiciado y sobre todo la obligación del Estado en cuanto a garantizar la seguridad jurídica que se encuentra regulada en el artículo 2º de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual limita a las autoridades que en el ejercicio de sus facultades legales deben actuar en observancia del principio relacionado, respetando las leyes vigentes, con respecto a la obtención





ANTEJUICIO
71-2018

Página 21

de medios de convicción y que oportunamente puedan ser aportados dentro de un proceso para que un juez competente pueda establecer la veracidad de los hechos denunciados, pues una acusación debe estar debidamente fundamentada a efecto de que posibilite su procedencia.

Esta Corte considera necesario hacer referencia a las conclusiones emitidas por el juez pesquisador, las cuales se transcriben a continuación: "...En el presente caso, se tienen las siguientes: **DECLARACIONES:** a) Rodrigo Presa Riera, quien en su deposición expresó que no se pagó nada al señor Felipe Alejos y él tampoco cobró, por lo que la negociación nunca se dio; y b) David Carlos Ekman Khan, expuso que no se negoció ni se pagó al antejuiciado y tampoco solicitó pago alguno, adicionalmente expuso que las devoluciones de crédito fiscal se diligencian a través de un reconocido bufete de Abogados que no tienen ninguna relación con el antejuiciado. **DOCUMENTOS:** a) Se vincula al antejuiciado con una acción de amparo presentada para la devolución fiscal, sin embargo no se presentó evidencia que él de manera personal o por tercera persona haya requerido los servicios del abogado que presentó dicha acción, adicionalmente se tiene Certificación de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- donde en el año dos mil catorce se presentaron ochenta y dos (82) acciones de amparo y en el año dos mil quince se presentaron doscientas noventa y ocho (298) acciones de Amparo, todas constantes y recurrentes que provienen de distintas entidades relacionadas a la devolución de crédito fiscal, por lo que, el amparo que se describe en las presentes diligencias, no es un caso aislado; b) informe suscrito por el Representante Legal de la entidad Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima, donde informa que por concepto de Agilización de crédito fiscal no se efectuó ninguna clase de pagos al señor Felipe Alejos Lorenzana (...) y d) Informe rendido por los Honorables

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



**ANTEJUICIO
71-2018**

Página 22

Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, a través del cual exponen que no ha recibido ningún tipo de influencias e injerencia por parte del antejuiciado en la tramitación de los expedientes referentes a la devolución de crédito fiscal. Como podrán apreciar los (...) como derivación de lo expuesto, se torna imprósperable un juicio penal, por lo que atendiendo al principio de objetividad, se concluye que el antejuiciado señor Felipe Alejos Lorenzana no recibió ni entregó ningún pago, tampoco influenció por sí o por interpósita persona a ningún funcionario público para obtener la agilización de crédito fiscal a favor de las entidades Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima y Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima, pues ambas entidades lo desvinculan de dichas acciones, en similares términos se expresaron los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al negar alguna influencia, lo expuesto, en lugar de fortalecer las evidencias que describe el ente investigador, las desvanece..." (sic).

De lo anteriormente relacionado, esta Corte al analizar los antecedentes, medios de convicción aportados, normas legales antes relacionadas y en concordancia con lo concluido por el juez pesquisador, quien actuó con base en el artículo 10 de la Ley en Materia de Antejuicio y solicitó la ratificación de la denuncia, practicó las diligencias que estimó pertinentes para el esclarecimiento del hecho, analizó los documentos con los cuales el ente investigador sustentó la petición presentada y escuchó al funcionario denunciado, por lo que estableció que no existen razones suficientes que fundamenten la procedencia del antejuicio y la declaratoria de que ha lugar a la formación de causa. Esta Corte estima que los hechos denunciados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, carecen de sustento, ya que





**ANTEJUICIO
71-2018**

Página 23

únicamente basó su denuncia en suposiciones y documentos que no son concluyentes en cuanto a la posible participación del diputado antejuiciado en los hechos que se le atribuyen; por lo tanto ante la falta de elementos de razonabilidad aportados y los pesquisados por el juez es procedente declarar que no ha lugar a la formación de causa, porque no existen indicios suficientes que pudieran sustentar la posibilidad de que el diputado del Congreso de la República de Guatemala, Felipe Alejos Lorenzana, hubiere incurrido en hechos que revistan las características de ilícitos, por lo que se comparte el criterio externado por el juez pesquisador en cuanto a declarar que no ha lugar a la formación de causa en contra del funcionario antejuiciado.

NORMAS LEGALES QUE SUSTENTAN ESTE FALLO

Artículos citados y 206 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 77 de la Ley del Organismo Judicial; 1, 2, 4, 10, 12, 14 literal a) y 19 de la Ley en Materia de Antejuicio.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, con base en lo considerado y en las leyes citadas, al resolver por mayoría **DECLARA: I) NO HA LUGAR A LA FORMACIÓN DE CAUSA** en contra de **FELIPE ALEJOS LORENZANA**, diputado del Congreso de la República de Guatemala. **II)** Notifíquese y archívese el presente expediente

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
GUATEMALA, C.A.


Benjicia Contreras Calderón
MAGISTRADA PRESIDENTE
SALA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO
PENAL, EN MATERIA DE ANTEJUICIO


Msc. Nester Mauricio Vásquez Pimentel
Presidente del Organismo Judicial
y de la Corte Suprema de Justicia





ANTEJUICIO
71-2018


Página 24



Dr. Nery Osvaldo Medina Méndez
MAGISTRADO VOCAL SEGUNDO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Msc. Vitalina Orellana y Orellana
MAGISTRADA VOCAL TERCERA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Voto razonado disidente
M.A. Deha Marina Obvilo Salazar
MAGISTRADA VOCAL CUARTA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

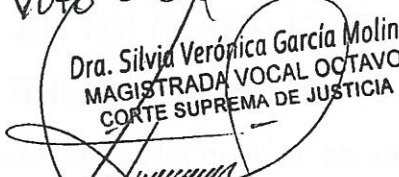

Dr. Jesús Felipe Baquix
MAGISTRADO VOCAL QUINTO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Jaime Amílcar González Davila
Presidente
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal,
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente

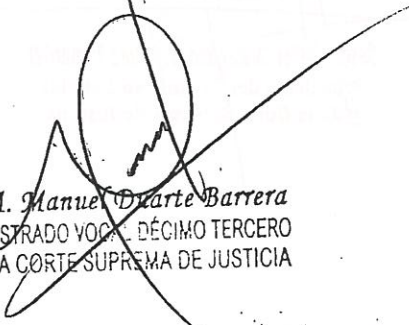

Msc. Sergio Amadeo Pineda Castañeda
MAGISTRADO VOCAL SEXTO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Voto en contra disidente


Dra. Silvia Verónica García Molin
MAGISTRADA VOCAL OCTAVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Dr. José Antonio Pineda Barales
MAGISTRADO VOCAL DECIMO PRIMERO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Dr. Raulfo Rafael Rojas Cetina
MAGISTRADO VOCAL DECIMO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


M.A. Manuel Duarte Barrera
MAGISTRADO VOCAL DECIMO TERCERO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Voto Disidente razonado
Dra. María Eugenia Morales Aceña
MAGISTRADA VOCAL DECIMO SEGUNDA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


M.A. Dora Leticia Flores
SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA





ANTEJUICIO 71-2018

Voto razonado disidente de la Magistrada Delia Marina Dávila Salazar, Magistrada Vocal Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución de fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad en auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, notificado a esta corte el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, emitido en los expedientes de amparos acumulados números 6224 y 6289-2018.

La suscrita no comparte el criterio de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que por mayoría, diez de sus integrantes emitieron dicha resolución, razón por la cual, de conformidad con los artículos 83 y 84 de la Ley del Organismo Judicial, expongo y fundamento mi voto en contra de dicha resolución, con base a las siguientes consideraciones:

Considero importante hacer referencia que el procedimiento de antejuicio es una garantía que preserva las funciones de la administración estatal, impidiendo que los funcionarios sean imputados por razones ilegítimas, políticas o espurias, siendo consideración de la suscrita que en el caso en específico la solicitud de antejuicio promovida por el Ministerio Público y la entidad querellante contra Felipe Alejos Lorenzana, diputado al Congreso de la República de Guatemala, **no es espuria**, en virtud que los hechos pueden ser constitutivos de delitos, iniciaron según el Ministerio Público, durante los operativos que tuvieron lugar el quince de abril de dos mil quince, dentro del caso "La Línea", encontrándose entre la multiplicidad de documentos incautados en los diversos allanamientos, información relacionada con expedientes de devolución de Crédito Fiscal, correspondientes a diversas empresas, desde entonces calificados como "clientes" de la organización, entre estas Zeta Gas



0000262

de Centroamérica, Sociedad Anónima y Compañía Agrícola Industrial Palo Gordo, Sociedad Anónima, al igual que la vinculación de personas como el propio Giovanni Marroquín Navas. Asimismo, considero que **la solicitud planteada es legal y legítima**, toda vez que el actuar del Ministerio Público se encuentra enmarcado dentro de lo regulado en el Decreto Número 40-94 del Congreso de la República Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual establece que *"El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública;..."* por lo que el Ministerio Público tiene capacidad y legitimación para promover antejuicio contra el diputado Felipe Alejos Lorenzana, en virtud de ser la institución encargada de la persecución penal, con funciones investigativas de delitos y **no políticas**. Razón por la que es imperativo que sea declarado con lugar el antejuicio, con el fin de viabilizar una investigación que permita identificar la comisión de supuestos hechos delictivos y el ejercicio del derecho de defensa dentro del debido proceso, dado que las evidencias que se aportan a la investigación previa, constituyen indicios suficientes para considerar que el antejuiciado pudo incurrir en los hechos detallados en la solicitud.

En los hechos que contiene la solicitud de antejuicio se indica que el antejuiciado se valió de su amistad con el señor Giovanni Marroquin Navas y de la que este tenía con servidores de la Superintendencia de Administración Tributaria, con el propósito de obtener para sí y para terceros beneficios indebidos, y porque aceptó una tarifa de éxito sobre su gestión. Así también, el diputado Felipe Alejos Lorenzana pudo haber incurrido en tales hechos, en virtud que indirectamente, por medio del señor Giovanni Marroquin, quien ya se encuentra ligado a proceso por estos mismos hechos, ofreció beneficios económicos a servidores públicos de la





administración tributaria, a título de regalo o pago por obtener un trámite expedito o preferencial en las solicitudes de crédito fiscal de las entidades Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima y Compañía Agrícola Industrial Palo Gordo, Sociedad Anónima.

Dentro del expediente constan medios de investigación como escuchas telefónicas y mensajes telefónicos a través de los cuales, según el ente investigador, coordinaban la entrega de documentos de las empresas relacionadas para que un abogado interpusiera recursos de amparo, con el fin de que el trámite pareciera lícito, así también, coordinaban el cobro de las comisiones que se harían a las empresas, al momento de que resultara favorable para la empresa la devolución del crédito fiscal, también acompañan declaraciones testimoniales, entre ellas la declaración del personero de la entidad Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima, Rodrigo Presa, quien indicó al Ministerio Público la manera en que fue contactado por el diputado Felipe Alejos Lorenzana para ofrecerle agilizar el trámite del pago de devolución del crédito fiscal, así también, información bancaria, agendas y documentos encontrados en allanamientos, dispositivos celulares con información vinculante a los hechos, de igual manera obran dentro del expediente, los informes de análisis criminal y financiero presentados por los denunciantes, donde se explica la manera en que operaron, dando cuenta de sus miembros y los roles desempeñados por cada uno.

La Corte Suprema de Justicia en la resolución que mediante este voto razono en contra, indica dentro de sus razonamientos "que los hechos denunciados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, carecen de sustento, ya que basó su denuncia en suposiciones y documentos que no son concluyentes en cuanto a la posible participación del diputado antejudiciado



0000264

en los hechos que se le atribuyen, por lo tanto la deficiente investigación del ente encargado de la persecución penal y la falta de elementos de razonabilidad aportados, es procedente declarar que no ha lugar a formación de causa". En el presente caso sí existen elementos de razonabilidad suficientes y una investigación previa y seria sobre la presunta participación del antejuiciado en los hechos que pueden revestir característica de delitos que hacen viable declarar con lugar el antejuicio, no se trata de una investigación deficiente, no se puede dar ese calificativo en esta fase, pues justamente el declarar con lugar el antejuicio permite al Ministerio Público realizar la investigación dentro del debido proceso sin que esto constituya violación al principio constitucional de inocencia, sino la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y todas las garantías dentro del debido proceso que toda persona debe gozar, ya que el antejuicio constituye un obstáculo a la persecución penal que no permite realizar una investigación completa para establecer la verdad y la presunta participación en los hechos objeto de la denuncia. En virtud de lo anterior, es criterio de la suscrita que existen motivos de razonabilidad basados en una investigación previa y seria, que constituyen indicios suficientes para concluir que los hechos **no son espurios**, que la denuncia **no es ilegítima** y que **no se promueve por razones políticas**, en congruencia con la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad expediente 2152-2013, que para la viabilidad de todo antejuicio, la denuncia o querrela debe basarse en una investigación previa y seria, en la cual se aporten elementos de razonabilidad suficientes que hagan viable la pesquisa, con el objeto de dilucidar los señalamientos emitidos en contra del funcionario enjuiciado. Este criterio se robustece por la Corte de Constitucionalidad expresando "*pues en el antejuicio no es necesario que se acrediten de una vez aquellos elementos constitutivos del dolo,*





0000265

conciencia y voluntad, basta con que existan los elementos necesarios para someter a causa criminal a quien goza del antejuicio y si así fuere, ya será en el procedimiento respectivo en el que se hará pronunciamiento sobre aquellos extremos"...Expediente 44-2009, 20 de septiembre de 2010.

Al respecto del informe del pesquisidor; conforme a la ley no es vinculante y considero que no se realizó con objetividad conforme a las actuaciones del expediente y a los elementos de su propia pesquisa.

En virtud de lo anterior, es criterio de la suscrita que la Corte Suprema de Justicia, al resolver el antejuicio planteado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en contra del diputado Felipe Alejos Lorenzana, debió declararlo CON LUGAR A LA FORMACION DE CAUSA, por las razones anteriormente expuestas. Solicitando que el presente voto razonado sea notificado junto con la resolución.

M.A. Delia Marina Dávila Salazar
MAGISTRADA VOCAL IV
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA







0000255

conlleva el fortalecimiento institucional al implementar medidas de carácter tecnológico y un sistema de votación electrónico accesible a las personas con discapacidad visual para garantizarles el derecho a la secretividad.

Por lo anteriormente indicado considero que las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debieron declarar que les asiste la razón a los postulantes; y debió exhortar a la autoridad impugnada a implementar los mecanismo, que garanticen el derecho a emitir el sufragio dentro de una esfera de secretividad a efecto de prevenir una vulneración a sus derechos, cumplimiento así con las disposiciones nacionales y de convencionalidad.

Por las consideraciones realizadas anteriormente, respetando pero no compartiendo el criterio de la mayoría, dejo constancia expresa de mi voto razonado, ya que por los argumentos esgrimidos se establece que debió otorgarse la protección constitucional de amparo instaurada. Solicitando que éste voto disidente sea notificado juntamente con la resolución.

*Dra. María Eugenia Morales Aceña
Magistrada Vocal Décima Segunda
Corte Suprema de Justicia*



VOTO RAZONADO DISIDENTE DE LA DOCTORA SILVIA VERÓNICA GARCÍA MOLINA, MAGISTRADA VOCAL OCTAVA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN LA RESOLUCIÓN, DICTADA DENTRO DEL ANTEJUICIO NÚMERO 71- 2018, DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019.

En cumplimiento a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, en resolución emitida el dieciséis de mayo del presente año, dentro de los expedientes acumulados 6224-2018 y 6289-2018, notificada a la Corte Suprema de Justicia el diecisiete del presente mes y año, realizo un nuevo estudio del caso, por lo que en

M. D. C. A. ...




0000256

congruencia con los razonamientos expuestos por el tribunal constitucional, procedo a razonar mi voto en los términos siguientes:

1. Sin entrar a conocer el fondo del asunto, sino que únicamente viabilizando el procedimiento de antejuicio, de acuerdo a las consideraciones y parte declarativa de la resolución que hoy se acata, se nos ordena resolver nuevamente y con fundamentos; indicando únicamente si existen o no hechos tipificados como delitos, y no como se fundamentó en la resolución del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, por la que se declaró no ha lugar a formación de causa contra Felipe Alejos Lorenzana, en calidad de Diputado al Congreso de la República de Guatemala, derivado de las diligencias de antejuicio promovidas en su contra por el Ministerio Público y Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
2. De las distintas acciones realizadas en la pesquisa, de los documentos obrantes en los antecedentes, las declaraciones de testigos y declaraciones de los involucrados, se establece que existen hechos que pueden ser tipificados como delitos, razones suficientes para ser investigadas por un juez del orden común, para que sea este el que determine si existe o no la posible comisión de algún ilícito, por lo que es necesario que mediante un debido proceso respetando el principio de inocencia y derecho de defensa, se investiguen las circunstancias y hechos acontecidos, conforme los elementos que obran en el expediente, para establecer si existió participación del señor diputado en los hechos que se le imputan. Por tales consideraciones, emito el presente voto en contra disidente, ya que estimo que debió dársele el trámite de la formación de causa. CONSTE.

Guatemala, veinte de mayo de dos mil diecinueve.



Dra. Silvia Verónica García Molina
Magistrada Vocal Octavo
Corte Suprema de Justicia





0000257



VOTO RAZONADO DISIDENTE DE LA ABOGADA MARÍA EUGENIA MORALES ACEÑA, MAGISTRADA VOCAL XII DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECIENUEVE, DICTADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DENTRO DEL ANTEJUICIO NÚMERO SETENTA Y UNO GUION DOS MIL DIECIOCHO (71-2018).

La suscrita magistrada Vocal XII, no comparte el sentido y argumentaciones de los Magistrados y Magistradas integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo ordenado por la honorable Corte de Constitucionalidad dentro de la acción constitucional de amparo acumuladas número 6224-2018 y 6289-2018, al haber resuelto: "NO HA LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA, en contra de FELIPE ALEJOS LORENZANA, diputado del Congreso de la República de Guatemala...", en el expediente de antejuicio arriba identificado.

La Honorable Corte de Constitucionalidad indicó categóricamente en la página 7 de la resolución dictada dentro de la acción constitucional acumulada ya identificada, que: "... se advierte que la autoridad denunciada se extralimitó en el ejercicio de sus facultades, lo cual conlleva vulneración al principio jurídico del debido proceso, debido a que no se limitó a declarar la existencia o no de hechos que puedan ser tipificados como delito, conforme a la preceptuado en la ley rectora del acto, sino emitió juicios de valor con relación a los elementos de convicción aportados, lo cual constituye función propia de los tribunales competentes, que efectuarán en su momento procesal oportuno."

En base a lo anterior y conteste con lo argumentado en su momento oportuno en mi voto razonado efectuado en la resolución de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, del antejuicio de mérito, me permito indicar que el antejuicio es un instrumento habilitante de los procesos penales. La presunción de fidelidad de



0000258

los funcionarios públicos a la Constitución no descarta la posibilidad de autenticidad de las acusaciones que contra ellos se realicen, esto sin vulnerar el derecho fundamental de presunción de inocencia que ostentamos todos y todas las personas en la República, entendiendo que el antejuicio no busca atribuir responsabilidades, sino que se establece como una acción de carácter administrativo, además, que no se pronuncia con autoridad de cosa juzgada sobre una violación a la ley, sino solamente sobre el hecho de existir indicios suficientes para que un órgano jurisdiccional pueda conocer sobre la posible responsabilidad o no, de una persona investida de esta inmunidad personal.

Con base a lo anterior, en el considerando IV de la resolución de mérito, específicamente en la página 21, la Corte Suprema de Justicia, estimó necesario hacer referencia a las conclusiones emitidas por el juez pesquisidor, siendo estas las únicas en que "fundamenta debidamente" su nueva resolución; sin embargo omite pronunciarse sobre los indicios documentales, encontrados durante el allanamiento efectuado en la captura del señor Giovanni Marroquín, en el cual se le incautaron, dispositivos electrónicos que contenían comunicaciones de audio y texto entre éste y el antejuiciado, lo cual podría ser un hecho relevante; tampoco fueron tomados en consideración los cuadros de clientes, gestiones y comisiones de Giovanni Marroquín Navas, por un trámite preferencial dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, los cuales constan en autos; siendo estos elementos de convicción que podría sustentar una posible participación del antejuiciado.

Ahora bien, en cuanto a la declaración de testigos, la Corte Suprema de Justicia en su resolución las transcribe del informe del juez pesquisidor y considera en forma descontextualizadas, al indicar que: "a) Rodrigo Presa Riera, quien en su deposición





0000259

expresó que no se pagó nada al señor Felipe Alejos y él tampoco cobró, por lo que la negociación nunca se dio..."; obviando que consta en autos la declaración testimonial del señor Presa Riera, la cual en su parte conducente indica que: "...en ese momento Felipe Alejos me comenta que él nos puede ayudar con el tema de la agilización de la devolución del crédito fiscal, yo me intereso en el tema porque Ingenio Palo Gordo, S.A. tiene derecho de reclamar devolución de crédito fiscal, por lo que yo le pregunto cómo funciona, él me comenta que es por medio de la interposición de un amparo y que él conoce la gente para ayudamos con el tema, en ese momento yo asumo que Felipe Alejos tiene a la gente, me refiero a abogados y contactos en la SAT para agilizar la devolución de crédito fiscal por ser él un diputado al congreso de la república, en ese momento me dice también que hay una tarifa de éxito en base a resultados pero que lo discutiríamos más adelante...", (el resaltado y subrayado es propio). Transcripción que se encuentra íntegramente contenida en los folios del 27 al 29 de la pieza I.

En cuanto a la declaración de David Carlos EkmanKhan, también se obvió lo siguiente: "...Unos días después recuerdo que Rodrigo me informa que Felipe Alejos mandó a recoger la documentación relacionada con los expedientes y mi acta notarial de nombramiento a la sede del Ingenio Polo Gordo y que después, Felipe Alejos le había enviado copia del amparo que el Abogado había colocado a ruego mío, quiero dejar claro que este amparo, si bien es cierto lo presenten a ruego mío, el mismo lo presentaron por instrucción de Felipe Alejos como parte de la gestión que había sido ofrecida. Efectivamente unos días después la Superintendencia de Administración Tributaria nombra Auditores para hacer la revisión correspondiente en relación a las solicitudes de devolución de crédito fiscal, por lo que, ante tal situación, entendí que el proceso estaba en



0000260

camino y que la gestión ofrecida por Felipe Alejas estaba avanzando...", (resaltado y subrayado es propio) dicha transcripción obra a folios 30 a 31 pieza I del expediente de mérito.

Y por último, se hace indispensable indicar que tampoco en esta nueva resolución se tomó como hallazgo inevitable, el informe sobre la Extracción Forense de Información CASO M tres mil quinientos cuarenta y dos diagonal dos mil quinientos diagonal tres", firmado por Richard Arévalo, investigador analista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, obrante en la pieza número I del folio 32 al 55 del expediente de mérito y su respectiva ampliación de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho.

De lo anterior deviene concluir que existen ensobre abundancia razones suficientes que fundamentan la procedencia del antejuicio, y su declaratoria de haber lugar a formación de causa del diputado antejuicio, basada en elementos de convicción documental (físico, electrónicos, etc), audios y de índole testimonial.

Considerando que la figura del antejuicio doctrinariamente es una prerrogativa, es decir un permiso, un beneficio o una dispensa que se otorga a una persona respecto a un determinado asunto, por lo cual no debe ser motivo de impunidad. Y recordando que esta Corte Suprema de Justicia ha sustentado que el contenido del informe del juez pesquisador no puede ser vinculante para la decisión tomada en esta fase administrativa, me aparto de lo resuelto, por la debilidad de este. Por las consideraciones realizadas anteriormente, respetando, pero no compartiendo el criterio de la mayoría, dejo constancia expresa de mi disenso, ya que por los argumentos esgrimidos se establece que se debió resolver haber lugar la formación de causa en contra del Felipe Alejos Lorenzana. Solicitando que este voto disidente sea notificado juntamente con la resolución.


Dra. María Eugenia Morales A.
Magistrada Vocal Décima Segunda
Corte Suprema de Justicia
REPUBLICA DE GUATEMALA, C.A.